



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

REGISTRO N° 978/24.4

//la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos - como Presidente- y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, para decidir acerca de los recursos de casación interpuestos en la causa **FCB 1392/2020/87/CFC3**, caratulada **"VIEYRA FERREYRA, Diego Alberto y otros s/recursos de casación"**; de la que **RESULTA:**

I. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, con fecha 14 de agosto de 2023, en cuanto aquí interesa, resolvió:

"...III.- TENER POR DESISTIDO PARCIAL Y FUNDADAMENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba con fecha 14 de diciembre de 2021, en contra del punto resolutivo 20) de la resolución dictada 9 de diciembre de 2021 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba (...).

V.- RECHAZAR el planteo de nulidad por vicios en la fundamentación de la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba (conf. art. 123, en función de los requisitos establecidos en los arts. 306 y 308 del CPPN).

VI.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto declaró la incompetencia material de la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los delitos de



defraudación por administración fraudulenta -hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-, debiendo el Juez Federal actuante remitir los antecedentes pertinentes de la causa a la Justicia Ordinaria, para la continuación del trámite que por ley corresponda (conf. art. 172, 173 inc. 7 y 174 inc. 5, del CP y art. 33, primer párrafo inc. 'e' y 'c' y art. 35 del CPPN).

(...) VIII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el PROCESAMIENTO de Martín José Dus (...) en orden al delito de asociación ilícita fiscal -hecho nominado primero- en carácter de autor (art. 15 inc. c) del Régimen Penal Tributario conf. Ley 27.430, art. 45 del CP y art. 306 del CPPN).

IX.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el SOBRESEIMIENTO de Cristián Debarre (...) en orden al delito de asociación ilícita fiscal -hecho nominado primero-, y disponer su PROCESAMIENTO en carácter de partícipe necesario (...) (art. 15 inc. c) del Régimen Penal Tributario conf. Ley 27.430, art. 45 del CP y art. 306 del CPPN).

X.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el SOBRESEIMIENTO por extinción de la acción penal por amnistía de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas -hechos nominados 75 y 76 del requerimiento de instrucción- (conf. art. 279 -1, 2 inc. 'd' y 15 inc. 'd' - de la ley 27.430; art. 336 inc. 1 del CPPN y art. 10 de la ley 27.541).

(...) XII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la SUSPENSIÓN de la acción penal con relación a Andrés Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento en orden a los hechos nominados 77 y 78 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativos del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. 'd' y 15 inc. 'd' de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XIII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la SUSPENSIÓN de la acción penal con relación a Jonathan Nahuel Suarez Cavalieri en orden al hecho nominado 80 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativo del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. 'd' y 15 inc. 'd' de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).



XIV.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la SUSPENSIÓN de la acción penal con relación a César Eduardo Cappella, Óscar Luque y Fernando Sciarra Villalba en orden a los hechos nominados 81 y 82 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativos del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. 'd' y 15 inc. 'd' de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XV.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la SUSPENSIÓN de la acción penal con relación a Patricio Rolando González en orden al hecho nominado 85 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativo del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. 'd' y 15 inc. 'd' de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XVI.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la SUSPENSIÓN de la acción penal con relación a Leuterio Carlos Bonetto en orden al hecho nominado 86 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativo del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. 'd' y 15 inc. 'd' de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

XVII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la SUSPENSIÓN de la acción penal con relación a Walter Ariel Ghione y Andrés Pollano en orden al hecho nominado 90 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativo del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. 'd' y 15 inc. 'd' de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

(...) XIX.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el SOBRESEIMIENTO de Mario Morselli y Augusto Boero en orden al delito de lavado de activos de origen ilícito - hecho nominado 104 y 105, respectivamente- (conf. art. 303 inc. 1 del CP y art. 336, inc. 3, del CPPN).

XX.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la FALTA DE MÉRITO de Martín Alejandro Sarmiento, César Eduardo Cappella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Paolo Srur, Mauricio Andrés Pinto, Patricio Rolando González y Leuterio Carlos Bonetto y DISPONER la suspensión de la acción penal y del cómputo de la prescripción de los delitos de lavado de activos de origen ilícito -hechos nominados 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113, respectivamente (conf. art. 303, inc. 1, del C.P.) (...).

XXI.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el SOBRESEIMIENTO de Jorge Daniel Cuevas respecto



del delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 99- (conf. art. 303 inc. 1 del CP y art. 336, inc. 3, del CPPN)".

II. Contra dicha decisión, interpusieron sendos recursos de casación la defensa de Cristian Debarre, el representante del Ministerio Público Fiscal, la querella conformada por la Unidad de Información Financiera y la querella conformada por la AFIP-DGI, los que fueron parcialmente concedidos por el tribunal de procedencia, conforme a las condiciones expuestas en el auto de fecha 25 de octubre de 2023 - y su aclaratoria del 22 de noviembre del mismo año- y oportunamente mantenidos ante esta instancia.

a) Recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre

El presentante encausó su impugnación a través de las previsiones de ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N.

Recordó que el juez a cargo de la instrucción dispuso el sobreseimiento de su asistido en relación al hecho nominado primero y calificado como asociación ilícita fiscal.

Agregó que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al resolver la impugnación del representante del Ministerio Público Fiscal, revocó el fallo de primera instancia y ordenó el procesamiento de Cristian Debarre como partícipe necesario del antedicho delito.

Concluyó que la inclusión del nombrado en la categoría de procesado tornaba procedente la vía casatoria "...ya que de no admitirse la presente impugnación la decisión del procesamiento no será controlada por ningún otro órgano judicial...".





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Consideró que la conducta atribuida no podía encuadrarse en la figura del art. 15 inc. "c" del régimen penal tributario de la ley 27.430.

Expresó que aquello que el Ministerio Público Fiscal refería como base de tal imputación, conformaba en realidad *"...un tramo del suceso correspondiente a la intervención del acusado en los hechos calificados como evasión de tributos..."*.

Aseveró que, si se atendía a la descripción de ese hecho, no podía advertirse en la conducta de Cristian Debarre ninguno de los elementos típicos que habilitaran a tenerlo como partícipe.

Precisó que su defendido no tomó parte en la estructura criminal, sino que representaba a la sociedad CORPHONE S.A., a la cual se la atribuía haber evadido impuestos en forma autónoma e independiente de la asociación ilícita tributaria y que, en dicho marco, se limitó a requerir facturas apócrifas, siendo así únicamente un cliente de la asociación criminal.

Enfatizó que el imputado pagaba para obtener esos instrumentos y que por lo tanto, la conclusión que se imponía, era que no formaba parte del grupo.

Sostuvo además que la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba de dictar el procesamiento de Debarre por asociación ilícita fiscal, partía de un entendimiento desacertado de las reglas del sistema de participación criminal del Código Penal.

Indicó que no bastaba una colaboración general, sino que solo podía ser tenido como cómplice aquél que efectuara una

Fecha de firma: 05/09/2024

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORROS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#36351724#425788091#20240905130518587

contribución que ayudara al autor en la comisión de un hecho delictivo específico.

Alegó que el tribunal fundó su criterio solo a partir de que las operaciones de descuento de cheques con fondos propios que realizó Debarre en favor de Diego Vieyra Ferreyra, proveyeran de liquidez y permitieron la continuidad y funcionamiento de la asociación.

Afirmó que, sin perjuicio de la insignificancia de los montos de dichos cheques en relación al volumen total manejado por la organización criminal, no podía caracterizarse a tales acciones como aporte, colaboración o ayuda típica con una agrupación cuyo objeto era la venta de facturas apócrifas.

Sintetizó que "[n]o hay ningún tipo de relación causal por medio de la cual puede inferirse que mediante esta actividad (...) se pueda colaborar en la producción de facturas falsas. Con este criterio cualquier tipo de actividad o personas que aporten flujo de dinero (...) deberían ser considerados partícipes...".

Agregó que no toda la actividad económica de Diego Vieyra Ferreyra era ilícita y que el descuento de cheques con Debarre era independiente de la producción de facturas.

Como hipótesis alternativa, a la que caracterizó como lógica y plausible, adujo que la relación entre ambos sujetos podía sustentarse en que los cheques fueran el instrumento de pago por los comprobantes fiscales que recibía CORPHONE S.A.

En ese orden, remarcó que la emisión de facturas apócrifas no se daba sin contraprestación, sino que el comprador abonaba lo recibido mediante cheques y que los restantes





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

imputados que compraban los instrumentos a la asociación procedían de la misma forma, pese a lo cual solo resultaron imputados por evasión tributaria.

Arguyó que el tribunal basó su decisión en pautas de excesiva latitud.

Solicitó que se anulara el fallo recurrido y que se confirmara el sobreseimiento de Cristian Debarre por el hecho calificado como asociación ilícita fiscal, de acuerdo al art. 336 inc. 3 del C.P.P.N.

b) Recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal

El impugnante encausó sus agravios a través de las previsiones de ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N.

Afirmó que la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba presentaba un análisis fragmentado y descontextualizado.

Objetó que se hubiera declarado la incompetencia de la justicia federal para entender en los delitos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación cometida en perjuicio de una administración pública.

Alegó que tales conductas eran inescindibles de los restantes ilícitos perseguidos y consideró que convalidar lo decidido implicaría un grave retraso en el avance de la causa, pues faltarían hechos que complementarían a la maniobra ilícita. Añadió que *"los delitos cuya competencia se pretende reconocer a la Justicia Ordinaria, no se podrían haber cometido sin el proceder delictivo de la asociación ilícita (...) en cuanto habría*



consumado previamente la facturación apócrifa...” y que entonces era correcta aquella posición que advertía que, por encontrarse en manos de la justicia federal la dilucidación de la matriz inicial, ésta estaba también en mejor posición para esclarecer los hechos restantes.

Expresó que, en situaciones de similares características, el tribunal de procedencia no había decidido en favor de la separación criticada.

Cuestionó que se hubiera descartado dictar el procesamiento de Martín José Dus y de Cristian Debarre por la figura de asociación ilícita del art. 210 del C.P. en concurso ideal con aquella del art. 15 inc. “c” del régimen penal tributario.

A tal fin, argumentó que la actividad de criminalidad económica tenía como último eslabón al lavado de dinero, pero que además se contaban hechos de administración fraudulenta, suponiendo “...una multiplicidad indeterminada de objetivos delictivos pre-ordenados desde el seno de la asociación...”. Citó precedentes de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en sustento de sus dichos.

Se agravió en relación a los sobreseimientos por extinción de la acción penal en favor de Edsel y Germán Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Arévalo, María Cecilia Ribera Ardiles y Federico Dellamigiore, dispuestos en función del art. 10 de la ley 27.562, respecto de los hechos nominados 75 y 76, descriptos como evasión de impuestos agravada





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas en relación a la contribuyente SOFTKEY S.A.

Explicó que para que procediera esa solución remisoría debían abonarse las costas y gastos causídicos, cuyo monto no había sido incluido en el plan de regularización de la contribuyente por no estar aún determinado. Agregó que, de acuerdo a lo informado por AFIP, tampoco estaba definida la totalidad de los tributos evadidos, pues no se había completado la fiscalización requerida por el propio juez de grado.

Refirió que tampoco se había analizado cuál era la fuente desde la que SOFTKEY S.A. obtuvo los \$72.122.831 que en una sola cuota abonó. Recordó que sobre Germán Destefanis recaía una imputación por lavado de dinero y adujo que entonces la necesidad de evaluar sobre la procedencia del dinero no era irrazonable.

En similar sentido, indicó que los socios de dicha persona jurídica estaban imputados por delitos que nada tenían que ver con la evasión tributaria y que por lo tanto era improcedente sostener que no se podía proseguir el proceso en función de las regularizaciones instadas.

Solicitó que se revocaran los sobreseimientos y que se dictaran los procesamientos por evasión de impuestos agravada.

Impugnó el dictado de la suspensión de la acción penal respecto de Eduardo Pinto, Leandro Srur y Martín Sarmiento por la contribuyente COREBI S.A., en orden a los hechos 77 y 78; de Jonathan Suárez Cavalieri en orden al hecho 89; de César Capella, Oscar Luque y Fernando Sciarra Villalba en orden a los hechos 81



y 82; de Patricio González, por el hecho 85; de Leuterio Bonetto, por el hecho 86 y de Walter Ghione y Andrés Pollano por el hecho 90, conductas todas que fueron calificadas como evasiones tributarias agravadas por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas.

Consideró que no estaba acreditado que dichos imputados estuvieran cumpliendo con los planes de pago y que, además, debían cancelarse las costas y gastos causídicos.

Respecto de Jonathan Suárez Cavalieri, precisó que no estaba completa la fiscalización sobre la sociedad ALOO S.A. y que no se conocía aún la totalidad de tributos evadidos. Agregó que no se había constatado una regularización y que tampoco había un dictamen favorable sobre si correspondía o no que dicha contribuyente efectuara la repatriación de bienes prevista en la ley 27.541.

Aseveró que podían llegar a existir miembros ocultos dentro de la entidad societaria y que entonces debía verificarse si hubo un posible incumplimiento del objeto estatutario y si ello era pasible de sanciones por el órgano de contralor, teniendo incidencia sobre el resultado acogido por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Enfatizó que los gastos y las costas no habían sido incluidas en el plan de regularización, pues todavía no estaban determinadas.

Sobre César Capella, Oscar Luque, Fernando Sciarra Villalba, Walter Ghione y Andrés Pollano, reiteró que no se había constatado la regularización, que tampoco se vislumbraba dictamen favorable sobre si correspondía o no que repatriaran bienes y, en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

el caso de los tres primeros, que las costas y los gastos no estaban determinados ni incluidos en el plan de regularización.

En punto a Patricio González y Leuterio Bonetto, recordó que AFIP manifestó que no se había completado la fiscalización, que por lo tanto no estaba determinada la totalidad de los tributos; que no se había constatado una regularización y que no había dictamen favorable sobre si debían o no repatriar bienes.

Se expidió en torno al sobreseimiento de Jorge Daniel Cuevas por el hecho 99, calificado como lavado de activos. Alegó que los magistrados realizaron conjeturas, dando por existente una relación entre los bienes declarados por el imputado con anterioridad a la investigación y la compra de aquellos que integraban el objeto de esta causa, pero que tal presunción no se ajustaba a la realidad.

Especificó que en el fallo se meritaba que la pareja y el hijo del imputado eran quienes habían adquirido los bienes materia de discusión, pero que no se acreditó que tuvieran capacidad económica para las operaciones de compra.

Adujo, respecto al mismo hecho, que la instrucción no estaba completa y que debían tomarse medidas para reunir los elementos necesarios a fin de acreditar la participación o desvinculación de Cuevas.

Puso en cuestión el dictado de los sobreseimientos de Mario Morselli y Augusto Boero, por los hechos 104 y 105, respectivamente. Recordó que allí se les atribuía el lavado de dinero de activos provenientes de la evasión tributaria de la



sociedad MITRE S.A., hecho nominado 87, y que se adoptó esa solución por entender que se trataba de una consecuencia necesaria de la aplicación de la ley 27.541, de modo que el lavado de dinero habría quedado sin objeto ilícito y resultaría atípico.

Afirmó que, de los informes parciales de la UIF y de la AFIP, surgían discrepancias entre las cuentas y las declaraciones presentadas por los imputados y que ello permitía suponer que carecían de capacidad patrimonial para las erogaciones realizadas.

Aditó que, si bien habían sido sobreseídos por el delito de evasión tributaria agravada, la instrucción sobre el lavado de dinero no estaba completa, ya que no estaba aún establecida la relación entre los bienes adquiridos y una actividad lícita.

Criticó que se hubiera revocado la falta de mérito de Martín Sarmiento, César Capella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Srur, Eduardo Pinto, Patricio Rolando González y Leuterio Bonetto y se hubiera dispuesto suspender las acciones penales y el cómputo de la prescripción por los hechos 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113, encuadrados como lavado de activos.

Consideró que la Cámara incurría en un error al entender que la evasión tributaria era el ilícito precedente al lavado de activos, ya que esa última figura estaría relacionada además con la asociación ilícita fiscal y las alteraciones dolosas de registros, entre otras.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Con cita de doctrina y precedentes jurisprudenciales señaló que, para juzgar el lavado de dinero "...alcanza con probar que los activos involucrados son 'bienes criminales' (dirty money), sin que sea necesario establecer precisamente la relación causal entre los bienes y el delito (previo) del cual provienen"; como también que "...la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico...".

Bajo tales condiciones, sostuvo que más allá de que se hubiera suspendido la acción penal por la evasión tributaria, no correspondía extender los efectos de la ley 27.541 al delito de lavado de activos.

Formuló reserva del caso federal.

c) Recurso de casación interpuesto por los representantes de la querellante Unidad de Información Financiera

Los presentantes dieron curso a su impugnación a través de ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N.

Consideraron que la decisión recurrida contenía defectos conceptuales sobre el alcance del art. 303 del C.P., "... en lo que respeta a la autonomía de dicho tipo penal y su relación con el ilícito precedente...", conllevando la arbitrariedad del temperamento liberatorio que se siguió respecto de Mario Morselli, Augusto Boero y Jorge Daniel Cuevas y de las faltas de mérito dictadas para con Martín Alejandro Sarmiento,



César Eduardo Capella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Paolo Srur, Eduardo Pinto, Patricio Rolando González y Leuterio Carlos Bonetto.

Recordaron que el sustrato fáctico de la causa se componía por hechos de evasión tributaria, por defraudaciones y por conductas calificadas como lavado de activos. Manifestaron que frente a ello, el tribunal a quo incurrió en una interpretación errónea, al preguntarse si las evasiones tributarias amnistiadas podían dar lugar al delito de lavado de dinero.

Explicaron que esa figura no requería establecer una relación de hecho principal y hecho dependiente, sino que revestía autonomía y que bastaba con establecer su vinculación razonable con un ilícito previo.

Sobre dicha base, precisaron que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se había extralimitado, ya que el régimen de regularización fiscal de la ley 27.541 se circunscribía a los delitos tributarios y no así a las defraudaciones, a la asociación ilícita y a los hechos materia de lavado, por lo que su perseguibilidad permanecía vigente.

Concluyeron que el dictado del sobreseimiento por los ilícitos tributarios por extinción de la acción penal no impedía que se considerara a los imputados como responsables por las conductas posteriores objeto de pesquisa, de haber ingresado al mercado legal bienes de origen espurio, ya que allí el bien jurídico afectado era otro.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Señalaron que tampoco existía certeza apodíctica para las desvinculaciones del proceso, en tanto los elementos reunidos hasta el momento eran insuficientes para realizar el juicio de mérito, ya fuera sobre la presencia de responsabilidad o sobre la ausencia de ella.

Puntualizaron que el tribunal de apelación no se ocupó de buscar argumentos o pruebas que le permitieran descartar la posibilidad de que el lavado de dinero tuviera origen en hechos de defraudaciones. Añadieron que los judicantes presumieron la justificación lícita de los bienes de cada imputado, sin fundar de forma circunstanciada cómo se alcanzaba dicha relación y por qué se descartaba que se tratara de activos producidos por el rédito económico de la asociación criminal fiscal que integraban. Estimaron que los postulados en contrario de las partes acusadoras fueron descartados sin fundamentación.

Agregaron que tampoco se daba una respuesta a la posibilidad de se hubiera incurrido en la práctica de mezclar bienes provenientes de actividades ilícitas con otros de carácter legítimo, a fin de encubrir a los primeros. Entendieron que se hizo caso omiso de las pruebas obrantes en la causa.

Enfatizaron que los estándares internacionales en materia de investigación y juzgamiento del lavado de activos exigían la tramitación sin demora y que, por tratarse de extremos regulados por convenciones supranacionales, debían aplicarse sus pautas de manera efectiva, a fin de no comprometer la responsabilidad del Estado Nacional frente a la comunidad soberana.



Formularon reserva del caso federal.

d) Recurso de casación interpuesto por las representantes de la querellante AFIP-DGI

Las letradas por la querella conformada por AFIP-DGI motivaron su recurso a través del art. 456 inc. 1 del C.P.P.N.

Consideraron que la decisión recurrida y su antecedente necesario, en cuanto respectivamente dispusieron y confirmaron el sobreseimiento de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis por los hechos numerados 75 y 76, incurrieron en la inobservancia de las previsiones de los arts. 9 y 10 de la ley 27.541.

Puntualizaron que el art. 10 de dicha ley recepta como posible la extinción de la acción penal "...inherente a los delitos que tengan por objeto las obligaciones regularizadas (...) cuando se verifique, no sólo su cancelación total (...) sino cuando además se cumplan todas las condiciones establecidas en dicho régimen legal".

Precisaron que el art. 9 de la ley 27.541 establecía que cuando las obligaciones acogidas fueran objeto de un procedimiento administrativo o judicial, los responsables debían asumir el pago de las costas y gastos causídicos y que no se diferenciaba si el mentado proceso era contencioso administrativo, penal o de ejecución fiscal.

Indicaron entonces que, para gozar del beneficio remisorio, los contribuyentes imputados debían asumir el pago de las costas y gastos causídicos y memoraron que, al tiempo en que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

se publicó en el boletín oficial la ley 27.562 -26/8/20-, las obligaciones tributarias del caso ya estaban judicializadas y formaban parte del proceso penal, pues el fiscal actuante promovió la acción contra los responsables de SOFTKEY S.A. el 19/8/20.

Estimaron que "...el tribunal habría asimilado la noción de 'procedimiento judicial' prevista en el primer párrafo del art. 9 de la ley 27.541 a la de proceso judicial en el que se persigue el cobro de las obligaciones evadidas y, bajo este entendimiento, habría sostenido que los procesos penales (...) no serían 'procedimientos judiciales' y por ende no sería exigible la asunción del pago de las costas...".

Citaron precedentes jurisprudenciales en sustento de sus dichos y refirieron que, incluso la misma Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en otras causas sobre aplicación de la ley 27.541, había resuelto que asumir las costas del proceso y los gastos causídicos era una consecuencia de la adhesión al régimen de regularización.

Agregaron que, de acuerdo con el art. 530 del C.P.P.N., toda resolución que pusiera término a la causa o a un incidente, debía resolver sobre el pago de las costas y remarcaron que la decisión cuestionada había omitido cumplir con esa manda.

Solicitaron que se revocara la decisión recurrida y que se ordenara que los imputados Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis asumieran el pago de las costas y gastos causídicos.



Formularon reserva del caso federal.

IV. Durante el término de oficina previsto por los arts. 465 y 466 del C.P.P.N., hicieron presentaciones las defensas de Cristian Debarre; de Eduardo Pinto, Leandro Srur y Martín Sarmiento; de María José Martínez Pizzichini; de Jorge Daniel Cuevas; las representantes de la querellante AFIP-DGI; el representante del Ministerio Público Fiscal; la defensa de Mario Morselli y Augusto Boero; y la defensa de Paola Arévalo y Edsel y Germán Destefanis.

a) La defensa oficial de Cristian Debarre sostuvo, con cita del precedente "Diez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la causa FBB 10744/2015/1/CFC1 "Zubeldía, Natalia Soledad s/recurso de casación", Registro n° 101/2023, del 23/02/23 de esta Sala, que en casos como el presente, en el que la Cámara de Apelaciones disponía el procesamiento del imputado, el tribunal de casación era el órgano jurisdiccional que debe garantizar una instancia de revisión amplia y sencilla.

Destacó que, de las constancias de la causa, se desprendía que su defendido sería un mero cliente de la asociación ilícita organizada por Diego Vieyra Ferreyra y que, por ello, resulta ilógico que se lo considerara parte integrante de esa misma organización a la que acudió, a fin de adquirir las facturas apócrifas que luego él utilizaría en favor de la sociedad anónima que representaba (Corphone S.A) con el objetivo de reducir el pago de tributos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

En esa inteligencia, agregó que los cheques secuestrados podían ser considerados como el instrumento de pago por las facturas que recibía "Corphone S.A.".

Solicitó que se hiciera lugar al recurso de casación y que se dejara sin efecto la resolución recurrida.

b) La defensa de Eduardo Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento solicitó que se rechazaran los recursos interpuestos por el Ministerio Publico Fiscal y por la Unidad de Información Financiera, por ser sustancialmente improcedentes.

Indicó que el fin último del proceso penal no era el recupero de ese dinero, sino el juzgamiento de las conductas ilícitas investigadas.

Conforme a ello, afirmó que no podía exigirse como requisito para obtener el beneficio de la extinción de la acción penal el previo pago de costas y gastos que no estaban regulados en autos, sino que de manera unilateral han sido calculados e informados por AFIP.

Además, aseveró que el mismo organismo recaudador manifestó que el plan de facilidades de pagos establecido por la ley 27.562 no incluía a los gastos causídicos dentro de los conceptos que podían ser regularizados.

Asimismo, señaló que *"no surge del texto del art. 9 de la ley 27.562, ni de la Resolución General 4816/2020 de AFIP, que el pago de costas y gastos sea requisito previo (o sine qua non, como sostiene el Fiscal de Cámara) para extinguir la acción penal, sino que en caso de existir, deberán ser asumidos por el*



responsable de la obligación regularizada y deberán ser reclamados por la vía pertinente”.

Por otra parte, destacó que los planes de pago 0291448, M600982 y N149235, regulados por la Ley 27.541, habían sido cancelados con fecha de 20/01/2022. Por ello, solicitó que previo a resolver se oficiara a AFIP para confirmar dicha circunstancia y que se declarara la extinción de la acción penal seguida a sus defendidos.

Idéntica solución propició con relación al delito de lavado de activos, tal como ha sido resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en los casos en que se declaró la extinción de la acción por evasión de impuesto y luego por lavado de activos.

Al respecto, puntualizó que en el caso de sus defendidos, la causa inició con una denuncia por evasión agravada de tributos por el uso de facturas apócrifas, lo que generó una diferencia de impuestos de casi \$4.000.000 correspondiente al IVA períodos 2018 y 2019 que fue regularizada en el plan de facilidades de pago previsto por la ley 27.541, de modo que la causa penal ya se encontraba suspendida por disposición legal con anterioridad incluso a la declaración indagatoria.

Con posterioridad, se indagó a sus defendidos por lavado de activos y se dispusieron a su respecto distintas medidas cautelares, que a la fecha se mantenían en base a que los bienes secuestrados podrían ser el producto del delito a “decomisar” en los términos del artículo 23 del Código Penal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Expuso que la deuda fiscal fue regularizada en su totalidad y enfatizó que la ley ordenaba la extinción de la acción penal tributaria ante tal supuesto. Aseveró que el análisis del delito de lavado de activos no podía desentenderse de esta circunstancia, atento que si el delito precedente había sido perdonado y la deuda fiscal regularizada, *"nos encontramos con que esa deuda deja de ser pasible de ser objeto del delito de lavado de activos, y vacía de contenido al hecho típico que requiere que exista un producto de un delito para blanquear"*.

Manifestó que la conclusión a la que arribó la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba era acertada, en cuanto consideró extinguido el delito de lavado de activos en casos de regularización total de la obligación tributaria, desde que los regímenes de blanqueo y regularización son medidas fiscales con finalidad recaudatoria que atraviesan la política criminal.

Consideró que la interpretación que pretendían otorgarle los apelantes controvertía el objetivo de la norma, así como también el principio de razonabilidad previsto en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional.

Explicó que, en el caso concreto, al acogerse COREBI S.A. al plan de regularización dispuesto por la Ley 27.541, cancelando las obligaciones fiscales determinadas por AFIP para los periodos fiscales 2018 y 2019, obtuvo, en los términos de la norma, la suspensión de la acción penal por la supuesta evasión en el Impuesto al Valor Agregado para sí y para Pinto y Srur, quienes como personas físicas habrían intervenido en los hechos por aplicación de la cláusula de actuar en lugar del otro, así



como también para Sarmiento, quien fue sindicado como partícipe necesario.

Argumentó que esta extinción implicaba una amnistía, en cuanto perdona y olvida aquello que podría haber sido configurativo de un delito. Estimó que, si se entendiera que la citada ley atacaba la tipicidad porque el hecho ya no era considerado delito, no había dudas que la ilicitud o presunción de ilicitud del dinero estaría absolutamente borrada y por ende la configuración del tipo penal de lavado de activos no operaría ni desde su tesis amplia, ya que, aun teniendo en cuenta su carácter autónomo, exigía una valoración y por ende mínima convicción respecto del carácter ilícito de la procedencia de los bienes.

Indicó que un razonamiento distinto implicaría una persecución por períodos fiscales que habían sido declarados, regularizados y amnistiados, resultando, en definitiva, una trampa para quienes se implicaron en ese régimen excepcional y de esa forma se auto inculparon.

Por lo expuesto, solicitó que se rechazaran los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera, con costas.

Hizo reserva del caso federal.

c) La defensa de María José Martínez Pizzichini solicitó que se declarara la inadmisibilidad de los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la querella conformada por la AFIP-DGI.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Indicó que dichas partes solo cuestionaban una fundamentación que no compartían. Refirió que no se había demostrado un apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, ni se habían acreditado deficiencias de razonamiento o motivación en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Agregó que las cuestiones discutidas habían sido resueltas de igual forma por las dos instancias precedentes, de modo que se había completado la doble conformidad judicial, sin que tampoco se elucidara la existencia de una cuestión federal que habilitara la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio según los lineamientos del fallo "Di Nunzio".

Consideró que los recurrentes reiteraban aquellas críticas intentadas al apelar la decisión del juez de grado y remarcó que los planteos esgrimidos ya habían tenido debida respuesta, concluyéndose que la interpretación pretendida por las partes acusadoras sobre los arts. 9 y 10 de la ley 27.541 no era ajustada a derecho.

Con cita de precedentes jurisprudenciales enfatizó que *"...ajustarse a la interpretación pretendida por la parte querellante, tornaría de cumplimiento imposible la adhesión al régimen, puesto que (...) no habría oportunidad para el Juez Instructor de establecer costas y gastos causídicos, al no haber resolución que ponga término a la causa..."*.

Con invocación del art. 530 del C.P.P.N. expresó que *"... el razonamiento del organismo recaudador es inaplicable. El orden*



lógico de las actuaciones implica que la determinación de costas y gastos causídicos se produce finalizada la causa”.

Sobre dicha base y en subsidio a las pretendidas declaraciones de inadmisibilidad formal de las presentaciones casatorias, pidió que los recursos de la fiscalía y de la querellante AFIP-DGI fuera rechazados, con la confirmación del sobreseimiento de María José Martínez Pizzichini.

Formuló reserva del caso federal.

d) La defensa de Jorge Daniel Cuevas solicitó que se declararan inadmisibles los recursos de casación del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera.

Sostuvo que en la decisión objetada y en su antecedente necesario, se había establecido que no era posible superar el juicio de tipicidad de la conducta y que, ante ello, los acusadores no habían especificado con qué diligencias concretas lograrían basar la imputación que pretendían.

Manifestó que, en caso de proseguir la pesquisa, no sería posible empeorar el cuadro cargoso, sino que la discusión se limitaría a verificar si se daba o no el encuadre previamente atribuido.

Agregó que, de adoptarse el criterio propuesto por los impugnantes, se sumaría mayor dilación al proceso y se abonaría la irrazonabilidad del plazo de duración.

Resaltó que existía ya doble conformidad judicial en torno al sobreseimiento de su asistido y meritó que no se había presentado una cuestión federal suficiente para abrir la instancia de casación.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Concluyó que las exigencias formales de los recursos no estaban completas, pues las contrapartes solo exhibían su disconformidad con lo resuelto.

Consideró que, de acuerdo con el art. 54 del C.P.P.F., contra las decisiones de las cámaras de apelaciones solo era procedente el recurso extraordinario federal y que también ello cimentaba la declaración de inadmisibilidad pretendida.

Refirió que la Unidad de Información Financiera sustentó su recurso en la tutela judicial efectiva e indicó que tal concepto se incluía entre las prerrogativas de las personas víctimas de delitos y no así de entes estatales. Especificó también que dicho organismo alegaba sobre delitos tributarios, a pesar de que se trataba de una temática ajena a su competencia funcional.

En segundo orden, estimó que la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba era ajustada a derecho y que debían rechazarse las impugnaciones.

Señaló que la fiscalía no explicaba qué diligencias faltó producir y se agravio por entender que esa parte pretendía que Jorge Daniel Cuevas probara que no adquirió sus bienes con dinero proveniente de un delito. Adujo que tal criterio implicaba la inversión de la carga de la prueba, en detrimento de la presunción de inocencia del nombrado. Añadió que la Unidad de Información Financiera tampoco desarrollaba argumentalmente qué cuestiones estimaba que restaba analizar.

Alegó que no alcanzaba con esgrimir el procesamiento de Cuevas por el delito de asociación ilícita fiscal para insistir



en torno al lavado de dinero, desde que "...no ha sido procesado por hechos puntuales de evasión que evidencien montos concretos evadidos como dinero espurio, pudiendo ser miembro de una asociación como 'coadyuvante' en la evasión ajena".

Expuso que la UIF aseguraba que se daba una errónea aplicación de la ley sustantiva, pero que no determinaba el contenido de esa crítica. Preciso que Cuevas se acogió a un régimen de sinceramiento de divisas en el año 2016 y que de tal modo no era posible sentenciar que cometió lavado de dinero, pues los activos que habría utilizado ya estarían legalizados.

Manifestó que tampoco se daban indicios para avanzar en la hipótesis de lavado de activos y que ambas instancias coincidían en que Cuevas tenía capacidad económica y un flujo lícito de bienes para justificar sus adquisiciones. Puntualizó que "...el imputado ya poseía un rodado de alta gama en el año 2013 (previo a estos sucesos), que fuera vendido en fecha cercana a la adquisición de otro rodado similar objeto de imputación, lo que explica que esa podría ser la procedencia del dinero...".

e) Las representantes de la querella conformada por la AFIP-DGI reafirmaron los motivos de agravio desarrollados en su recurso de casación, referentes a la errónea aplicación por el tribunal a quo de los arts. 9 y 10 de la ley 27.541 y, en segundo orden, expusieron las razones por las que consideraban que debía confirmarse el procesamiento de Cristian Debarre como partícipe necesario de la asociación ilícita fiscal.

Sobre ese último punto, indicaron que el nombrado prestó una ayuda esencial para el funcionamiento de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

organización criminal, a partir de ser quien se ocupaba de cambiar cheques a Diego Vieyra Ferreyra, a fin de que pudiera contar con dinero en efectivo para solventar su accionar.

Precisaron que "...el solo hecho de ser usuario o 'cliente' de la organización liderada por el Sr. Vieyra Ferreyra no convierte al Sr. Debarre en miembro de la banda ni en partícipe necesario de la misma; sin embargo el motivo por el cual se ha ordenado su procesamiento como cómplice primario (...) no ha sido su intervención como usuario de las facturas falsas comercializadas por la asociación ilícita sino por haber realizado, a título personal (no como responsable de Corphone SA), operaciones de descuento de cheques que le fueron requeridas de modo sostenido en el tiempo por Diego Vieyra Ferreyra".

Sintetizaron que la plataforma fáctica que motivó su procesamiento como cómplice necesario del delito de asociación ilícita fiscal, no estaba dada por su rol de cliente de la banda y que, receptando tal entendimiento, los argumentos de la defensa para obtener su sobreseimiento debían ser dejados de lado.

Remarcaron que Debarre no fue procesado como miembro de la asociación, sino como partícipe ajeno a su estructura, pero que brindó una cooperación necesaria para su funcionamiento.

Detallaron que "...la gestión de comprobantes falsos involucra no sólo la emisión y el registro de facturas falsas sino también la ficción de un circuito de pagos referido a las operaciones simuladas. A fin de dar apariencia de veracidad (...) los pagos de las compras o servicios simulados debían efectuarse por medios bancarios; por esta razón frente a cada falsa



operación instrumentada en las facturas apócrifas comercializadas (...) constan emitidos los correspondientes cheques a nombre de las usinas que aparecen como vendedoras o prestadoras de servicios.

Claramente los cheques emitidos para simular el pago (...) no eran efectivamente cobrados por las usinas (...); sin embargo varios de esos cheques eran entregados por las usuarias (...) al Sr. Vieyra Ferreyra en pago por los comprobantes falsos recibidos. Ahora bien, la organización ilícita obtenía sus ganancias merced al 'precio' o 'comisión' que cobraba a sus clientes, para lo cual necesitaba cobrar los títulos de crédito...".

Concluyeron que Debarre colaboró en dicha etapa de efectivización de ingresos, pues actuó frente a permanentes y sostenidos pedidos de Diego Vieyra Ferreyra, permitiéndole a este y a la organización continuar la actividad y distribuir las ganancias obtenidas.

Agregaron que el contexto descripto se unía al cabal conocimiento por parte del nombrado sobre el origen de los cheques y que ello determinaba que su cooperación adquiriera relevancia criminal.

Señalaron que la posición de la defensa, en cuanto alegaba que las acciones de cambio y descuento de cheques de Cristian Debarre resultaba lícita y neutral, no era certera, desde que "...la conducta (...) a sabiendas de la existencia de la asociación ilícita y con conocimiento de que mediante el canje de valores (...) permitía monetizar a la organización (...) resulta subsumible en la figura de la asociación ilícita fiscal en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

calidad de partícipe necesario". Citaron precedentes de esta Sala IV en refrendo de sus dichos.

En similar sentido, indicaron que, del contenido de las conversaciones telefónicas mantenidas entre Diego Vieyra Ferreyra y Cristian Debarre, se revelaba que la asociación permanentemente requería liquidez y que el segundo nombrado era quien recibía los cheques y aportaba a cambio dinero en efectivo.

En conjunción, memoraron que, en los allanamientos a los domicilios de Debarre, se encontraron gran cantidad de cheques de Diego Vieyra Ferreyra y dos cuadernos con anotaciones sobre la intermediación financiera realizada en forma cotidiana por Debarre, con detalle sobre los cheques monetizados a su consorte.

Afirmaron que no había trato desigual respecto de otros sujetos que solo fueron imputados por evasión tributaria agravada, ya que tales personas no habían colaborado descontando cheques.

Aditaron que, toda vez que la firma Corphone S.A., de la cual Debarre sería el verdadero dueño, computó más de cuarenta millones de pesos de crédito fiscal espurio proveniente de las facturas falsas emitidas a nombre de las usinas manejadas por la asociación ilícita fiscal, el imputado sabía cuál era la actividad desarrollada por la banda, sabía cuáles eran sus objetivos y conocía que las personas físicas y jurídicas que aparecían como emisoras eran prestanombres sin capacidad económica.



Arguyeron que la única actividad económica que se conocía respecto de Diego Vieyra Ferreyra al tiempo de la comisión de los hechos de la causa era la creación y venta de comprobantes falsos, por lo que tampoco podía hipotetizarse que los títulos de crédito que Debarre le cambiaba pudieran provenir de otras actividades lícitas.

f) El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la declaración de incompetencia material de la justicia federal sobre los hechos presuntamente constitutivos del delito de defraudación por administración fraudulenta y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública (hechos 90, 91, 95 y 96) era incorrecta.

En sustento de su posición, sostuvo que "la estrecha vinculación que existe entre los delitos investigados hace imposible su estudio por separado". Refirió que no es factible separar los delitos cuando son cometidos como medio o fin de otros y que el fuero federal atrae a los delitos ordinarios cuando ocurre esa relación.

Afirmó que, por esta razón, "todos los delitos que forman parte de esta investigación deben ser instruidos por la justicia federal en tanto ésta es competente para hacerlo respecto del delito de asociación ilícita fiscal, cuyas facturas sirvieron de medio para las defraudaciones posteriores".

En suma, indicó que las conductas investigadas son inescindibles de las de competencia federal y que, por ello, el argumento esgrimido por el tribunal de la instancia anterior para





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

fundar la competencia ordinaria, basada en la calidad de los sujetos pasivos de los delitos de defraudación (sociedades comerciales y entes estatales de la Provincia de Córdoba) no resultaba relevante para dirimir la cuestión.

Por último, refirió que dividir la investigación en distintos tribunales afectaría la buena administración de justicia federal.

Por otra parte, afirmó que los beneficios penales previstos en la ley 27.541 (extinción/suspensión de la acción penal) no resultaban aplicables al presente caso.

En dicho sentido, señaló que si bien la mencionada ley no excluía expresamente a las evasiones agravadas por el uso de facturas apócrifas de su ámbito de aplicación (como sí sucedería, a su entender, con las deudas por contribuciones con destino a las obras sociales), podía arribarse a la conclusión de que no las contempla si se realizaba una interpretación de la finalidad que tuvo en miras el legislador federal al momento de sancionar el régimen bajo estudio (Fallos: 323:3139).

Consideró que la finalidad de la ley era clara: promover la reactivación productiva de nuestro país, mediante la implementación de un régimen de regularización de obligaciones con ciertos beneficios penales, y no la "venta de amnistías" a quienes pudieran pagarlas.

Puntualizó que las evasiones aquí investigadas estaban estrechamente vinculadas con la existencia de la asociación ilícita fiscal que proveía a muchísimos contribuyentes de las facturas apócrifas utilizadas para eludir el pago de las deudas



tributarias (de tributos nacionales). Es decir, que se trataría de un caso de mega evasión tributaria articulada mediante maniobras complejas y de difícil detección para el organismo recaudador, por lo que, en este caso, la afectación al bien jurídico protegido (erario público) sería mucho más intensa de lo que podría ser un caso de evasión simple cuyo ardid o engaño consistiera, por ejemplo, en la mera presentación de declaraciones falsas, inexactitudes en libros contables, etc.

Por esta razón, y teniendo en cuenta las particularidades del caso (evasiones millonarias, la existencia de una organización para la producción de facturas apócrifas, posteriores conductas de "blanqueo", etc.), estimó que las evasiones imputadas no podían quedar bajo el amparo de la ley 27.541, cuyo fin era la protección del contribuyente con meras dificultades económicas en un contexto de emergencia.

Afirmó entonces que no correspondía suspender/extinguir la acción penal respecto de los hechos 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 90, calificados como evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas.

Por otra parte, manifestó que el tribunal de la instancia anterior no brindó argumentos suficientes para confirmar los sobreseimientos dispuestos por los hechos 104 y 105 (punto dispositivo XIX) y la suspensión de la acción penal en los hechos 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113 (punto dispositivo XX).

Al respecto, destacó que para trasladar al delito de lavado de activos las consecuencias de las amnistías penales





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

recaídas sobre las evasiones tributarias (delitos precedentes), los jueces realizaron un razonamiento automático que no abordó de manera suficiente todas las aristas que presentaba el tema.

Expuso que, para determinar qué sucedía con el delito de lavado una vez que el delito precedente era amnistiado, se debía tener en cuenta que el primero es autónomo del segundo, sin que fuera exigible la existencia de una sentencia condenatoria a su respecto. De este modo, el dictado de un sobreseimiento o sentencia absolutoria respecto del delito anterior no constituiría un impedimento para considerar al imputado responsable por la conducta posterior de "blanqueo". Es decir que, en este sentido, lo que ocurriera con el delito precedente no tendría influencia sobre el delito siguiente.

Agregó que el delito de lavado no requería que el hecho anterior del cual provenían los bienes hubiera sido un hecho culpable y punible, sino que bastaba con que haya sido ilícito (típico y antijurídico). Adujo que, en el caso bajo estudio, al momento en que se cometió el lavado, las evasiones tributarias reunían todos los elementos de ese tipo penal. Es decir que el dinero provenía de conductas ilícitas.

Sostuvo que el posterior sobreseimiento de las evasiones por aplicación retroactiva de los nuevos montos establecidos en la ley 27.430 nada cambiaba, porque si bien el Régimen Penal Tributario elevó la condición objetiva de punibilidad de la evasión, esta figura no había sido eliminada del ordenamiento penal y continuaba vigente. Lo mismo sucedía con las evasiones cuya acción penal fue suspendida/extinguida en



virtud de los planes de pago suscriptos por los contribuyentes. En estos casos, la cancelación de la deuda tributaria no subsanaría la ilicitud de las evasiones y el pago no convertiría la conducta en lícita, sino que solo borraría su punibilidad (art. 10, ley 27.541).

Estimó que, de lo contrario, se extenderían de manera indiscriminada las amnistías que fueron dispuestas por el legislador para las evasiones (delitos precedentes) y se despenalizarían las conductas de lavado que no se pretendió abarcar.

En definitiva, expuso que la Cámara no podía afirmar sin más que el delito lavado debía "contagiarse" de los efectos de la amnistía que recayó sobre el delito precedente y que los jueces debieron mínimamente analizar y refutar las consideraciones aquí expuestas, por ser esenciales para elaborar una respuesta a la cuestión planteada. Al no hacerlo, la sentencia impugnada careció de fundamentos suficientes, razón por la cual debe ser descalificada en base a la doctrina de la arbitrariedad.

Por último, solicitó que se declarara inadmisibile el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre, por entender que no se dirigía contra una resolución definitiva o asimilable a tal.

En dicho sentido, indicó que la decisión recurrida- cuyo único efecto era que el imputado continuara sometido a proceso- no se encontraba comprendida entre las enunciadas en el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

art. 457 del CPPN, así como tampoco ocasionaba un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Agregó que el recurso planteaba cuestiones de hecho y prueba, derecho común y procesal, que serían modificables en el transcurso del proceso y que el recurrente no lograba acreditar la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio ("Di Nunzio", Fallos 328:1108).

Por lo expuesto y por las razones esgrimidas en el recurso de casación, solicitó que se hiciera lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y de las querellas y que se declarara inadmisibile el recurso de casación de la defensa de Cristian Debarre.

g) La defensa de Mario Eduardo Morselli y Augusto Boero solicitó que se confirmara el sobreseimiento de ambos por los hechos de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas, como también por aquellos numerados 104 y 105 e imputados como lavado de activos.

Meritó que la decisión remisorio del juez de grado y su confirmación por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se ajustaban a derecho y que, de adverso, los recursos deducidos por las partes acusadoras eran infundados y contenían argumentos equivocados.

Enfatizó que era erróneo entender que el sobreseimiento de Morselli y Boero por la primera de las figuras penales mencionadas se hubiera debido a su acogimiento al régimen de la



ley 27.541, puesto que dicha solución habría tenido sustento en que la conducta devino atípica luego de la sanción del régimen penal tributario de la ley 27.430, al no alcanzar el hecho atribuido el umbral mínimo de punibilidad de \$1.500.000.

Sostuvo que no había ilícito alguno que pudiera ser considerado como precedente del lavado de activos.

En relación a los sobreseimientos por ese tipo penal, indicó que la fiscalía cuestionaba que se hubiera concluido que Morselli y Boero contaban con capacidad económica y afirmó que lo hacía *"...a ciegas, sin citar bienes, montos o actos concretos"* que le dieran basamento real a su tesis. En torno a la Unidad de Información Financiera, agregó que solo se había limitado a expresar su disconformidad.

h) Los defensores de Edsel Destefanis, Paola Arévalo y Germán Destefanis explicaron que la firma SOFTKEY S.A. rectificó las declaraciones juradas del IVA de los periodos 2018 y 2019, que canceló todo lo adeudado en relación a ese impuesto a través del régimen de regularización de la ley 27.541 y que todo ello constaba en el informe de AFIP del 16/12/20.

Memoraron que, en dicha pieza, AFIP manifestó además que, para determinar si las rectificaciones y el pago abarcaban la totalidad de las obligaciones emergentes, había que esperar a que concluyera la inspección que estaba en trámite y alegaron que, en las circunstancias actuales, esa pesquisa había concluido *"...sin que se determinara ni se ajustara diferencia alguna a regularizar, por lo que se confirma que (...) abarca la totalidad de lo regularizado por IVA periodos 2018 y 2019, reprochados en*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

los hechos septuagésimo quinto y septuagésimo sexto de la Requisitoria Fiscal".

Detallaron que el monto abonado fue de ocho millones setecientos veintiún mil quinientos noventa y siete pesos con noventa y siete centavos (\$8.721.597,97) y que la suma de setenta y dos millones ciento veintidós mil ochocientos treinta y un pesos (\$72.122.831) mencionada por el Ministerio Público Fiscal, no obedecía a constancias reales.

En adición, recordaron que la AFIP solo se agraviaba respecto a sus asistidos por la falta de pago de las costas y gastos causídicos.

Por otra parte, aseveraron que a la fecha de la sanción de la ley 27.541, las conductas que se reprocharon a sus defendidos como evasiones tributarias no estaban incluidas en el proceso judicial, por lo que no existían gastos y costas a cargo de SOFTKEY S.A. que abonar a ese momento. Añadieron que la AFIP tampoco indicaba cuáles eran tales conceptos, en los que sustentaba su agravio.

Solicitaron que se rechazaran los recursos del fiscal y de las partes querellantes.

Formularon reserva del caso federal.

V. Con fecha 13 de junio del corriente año se cumplieron las previsiones de los arts. 465 y 468 del C.P.P.N., oportunidad en que compareció mediante el sistema de videoconferencia e hizo uso de la palabra la defensa de Federico Dellamaggiore, y en que presentaron breves notas las defensas de Daniel Barón y Carolina Cristori, de Eduardo Mauricio Pinto,



Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento; de María José Martínez Pizzichini y de Jorge Daniel Cuevas y la querellante AFIP-DGI.

a) La defensa de Federico Dellamaggiore solicitó que se confirmaran las decisiones de las instancias de procedencia, en cuanto resolvieron la extinción de la acción penal seguida respecto del nombrado por los hechos 75 y 76.

Enfatizó que la ley 27.562 reconocía como beneficio por el acogimiento al régimen de moratoria y la subsiguiente cancelación de obligaciones fiscales, la suspensión o la extinción de la acción penal, según se tratara de un pago parcial o total.

Estimó que ello estaba completo en el caso de su asistido, pues él había abonado íntegramente la obligación adeudada. Agregó que no estaba imputado por otros delitos, ni estaba incluido en acusaciones por maniobras de criminalidad organizada y que el contexto que pudiera existir no debía incidir frente a la solución que propiciaba, reputando que ésta era acorde al principio de legalidad penal y a la finalidad teleológica de la ley 27.562.

Se refirió al requerimiento de las partes acusadoras de que los gastos y las costas causídicas fueran abonados para tener por cancelada la deuda en forma completa y expreso que se trataba de una exigencia de imposible cumplimiento, ya que dichos conceptos no habían sido regulados aún, sino calculados unilateralmente por la AFIP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

b) La defensa de Daniel Barón y Carolina Cristori solicitó que se rechazara el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y que se confirmara la declaración de incompetencia de la justicia federal para conocer en los hechos de administración fraudulenta numerados 91 y 92.

Adujo que aquella parte acusadora no había brindado fundamentos que justificaran su requerimiento, que los supuestos del caso no quedaban encuadrados en el art. 116 de la C.N. o en el art. 33 del C.P.P.N. y que tampoco había intereses de la Nación que estuvieran en juego.

c) La defensa de Eduardo Pinto, Leandro Srur y Martín Sarmiento pidió el rechazo de los recursos de casación del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera.

Enfatizó que la sanción por el Poder Legislativo de una ley de blanqueo fiscal con efectos extintivos sobre la acción penal debía ser entendida como el otorgamiento de una amnistía en el marco del art. 75 inc. 20 de la C.N. y que esa debía extenderse a la figura del lavado de dinero como delito posterior a la evasión fiscal.

Expresó que el actuar en contrario y la persecución del segundo delito atentaría contra la finalidad de recaudación extraordinaria puesta de manifiesto por el legislador, implicarían tender una trampa desalentando el acogimiento al régimen y resultarían, en definitiva, opuestos a la idea de seguridad jurídica.



d) La defensa de María José Martínez Pizzichini se remitió en primer orden a los argumentos expuestos en el término de oficina y pidió que se declararan inadmisibles o que se rechazaran los recursos de casación en trámite.

En segundo lugar, refirió que una vez radicados los autos ante esta instancia, el representante del Ministerio Público Fiscal incorporó un agravio que no estaba incluido entre aquellos de su impugnación.

Explicó que el señor Fiscal General ante esta Cámara sostuvo que las evasiones del *sub lite* no podían quedar amparadas en las previsiones de la ley 27.541, pues tenían estrecha vinculación con la asociación ilícita fiscal que proveía facturas apócrifas, tratándose de un extremo que permitiría caracterizar a los ilícitos como "...mega evasión tributaria...", lo que implicaría una afectación mucho más intensa del erario público.

Afirmó que la defensa no había tenido oportunidad de alegar al respecto, por no haber sido planteada la cuestión en ninguna de las instancias anteriores.

Agregó que la facultad de introducir nuevos agravios estaba reservada al imputado, con el fin de garantizar su derecho de defensa y la revisión amplia de la sentencia condenatoria.

Solicitó que esta Sala no se expidiera sobre el nuevo motivo alegado por el Ministerio Público Fiscal.

e) La defensa oficial de Jorge Daniel Cuevas mantuvo las manifestaciones expuestas en términos de oficina y amplió las consideraciones relativas a la inadmisibilidad de los recursos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera.

Sostuvo que a partir de un "nuevo paradigma pensado desde la horizontalidad y no desde la verticalidad (resabio monárquico-inquisitivo), sin jerarquías, con colegios de jueces, funciones rotativas, y la misma remuneración como jueces de cámara para todos los intervinientes..." se cancelaba la intervención de esta Cámara frente a fallos de cámaras de apelaciones, por lo que la doctrina plenaria sentada en el precedente "Ruiz" debía reverse, conforme a los argumentos desarrollados en su presentación.

f) Por su parte, las representantes de la AFIP ratificaron *in totum* los argumentos expresados en el recurso de casación y en la presentación efectuada en término de oficina.

Superada dicha etapa procesal y efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

Quedaron, en consecuencia, las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

I. Admisibilidad de los recursos

a) El recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre resulta formalmente admisible, toda vez que la decisión impugnada resulta equiparable, por sus efectos, a sentencia definitiva (art. 457 del C.P.P.N.).

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, en el reciente precedente "Diez", que a



raíz de que el auto de procesamiento resulta recurrible de acuerdo con lo previsto por la ley procesal (art. 311 del C.P.P.N.) corresponde evitar que este derecho sea suprimido en los casos en los que el auto de mérito sea dictado por un órgano revisor (Fallos: 344:3782, reafirmado en FSA 24000743/2004/1/1/1/RH2 Elicabe, Ricardo s/incidente de recurso extraordinario, del 24 de noviembre de 2022).

Por lo demás, el recurrente se encuentra legitimado para impugnar la decisión en crisis, se han invocado fundadamente los motivos previstos en el art. 456 del digesto ritual y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del C.P.P.N.

b) El recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal resulta parcialmente admisible, en cuanto impugnó los puntos dispositivos VI, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI y XXIII, toda vez que la parte se encuentra legitimada para hacerlo (art. 458 del C.P.P.N.) y se trata de tópicos decisorios de aquellos considerados definitivos por el art. 457 del C.P.P.N. (puntos X, XIX y XXI) o equiparables a definitivos de acuerdo al mismo artículo del C.P.P.N. y habiendo la parte alegado fundadamente la existencia de cuestiones federales -supuestos de arbitrariedad y denegatoria del fuero federal- en los términos de la doctrina de Fallos: 328:1108 (puntos VI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX y XXIII).

En conjunción, los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.

Distinta es la solución que estimo correcta en cuanto al cuestionamiento por el Ministerio Público Fiscal del punto dispositivo IX de la resolución recurrida, que revocó el sobreseimiento de Cristián Debarre y dispuso su procesamiento, en carácter de partícipe necesario, en orden al delito de asociación ilícita fiscal.

A tal respecto, el recurrente sostuvo la existencia de un concurso ideal entre las figuras de asociación ilícita prevista en el art. 210 del C.P. y la asociación ilícita fiscal prevista en el art. 15, inciso c) de la ley 27.430.

Del estudio de las presentes actuaciones estimo que no se han observado los recaudos establecidos por la legislación procesal para la procedencia del recurso incoado, circunstancia que en definitiva conducirá a declararlo parcialmente inadmisibile.

Corresponde señalar que en nada impide arribar a dicha solución la circunstancia de que anteriormente se haya dispuesto dar trámite a la impugnación mencionada, toda vez que, tal como lo sostiene la jurisprudencia y prestigiosa doctrina, la situación apuntada no constituye óbice para que este Tribunal ulteriormente realice un nuevo análisis sobre la procedencia formal del recurso interpuesto, incluso antes o después de la audiencia para informar o al tiempo de dictar sentencia (al respecto, véase De la Rúa, Fernando, "La Casación Penal", págs. 240/243 y sus citas, editorial Depalma, Buenos Aires, 1994; Raúl



Washington Ábalos, "Código Procesal Penal de la Nación", págs. 953/954, 2ª ed., E.J.C., Santiago de Chile, 1994; Guillermo R. Navarro - Roberto R. Daray, "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", t. 3, págs. 351 y 432, 5ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2013 y, entre otros precedentes de esta Sala IV, en los autos FLP 24271/2016/CFC1, "RODRÍGUEZ, Omar Claudio y otra s/recurso de casación", Reg. 951/19, del 16/5/19).

Sentado ello, cabe destacar que atento el carácter provisional de la adecuación típica discernida, la decisión cuestionada no solo no se encuentra comprendida entre las enunciadas en el art. 457 del CPPN, sino que tampoco ocasiona un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, requisito esencial para la admisión del recurso en cuestión, máxime si no se alegó que la calificación legal propiciada tenga entidad para la modificación de otros institutos.

Por lo demás, la ausencia de doble conforme judicial tampoco autoriza la procedencia del recurso intentado por el acusador público, conforme la doctrina sentada por nuestro más Alto Tribunal en el caso "Arce", (Fallos: 320:2145).

Por ello, propicio declarar parcialmente mal concedido el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra el punto dispositivo IX de la resolución recurrida (art. 444 C.P.P.N.).

c) Finalmente, los recursos de las querellantes Unidad de Información Financiera y AFIP-DGI resultan formalmente admisibles, toda vez que los puntos decisorios recurridos son definitivos o equiparables a tales (art. 457 del C.P.P.N.), las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

partes se encuentran habilitadas para impugnarlos (art. 460 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.

II.A) Competencia respecto de los hechos 91, 92, 95 y 96, atribuidos como defraudación en perjuicio de una administración pública y defraudación por administración fraudulenta.

Sobre este punto, el tribunal de la instancia anterior, por mayoría, resolvió "VI. CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto declaró la incompetencia material de la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los delitos de defraudación por administración fraudulenta - hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública - hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-, debiendo el Juez Federal actuante remitir los antecedentes pertinentes de la causa a la Justicia Ordinaria, para la continuación del trámite que por ley corresponda...".

Corresponde señalar que, al requerir la instrucción del presente proceso, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que "en fecha no determinada, pero presumiblemente desde enero 2018 al día de la fecha, Diego Alberto Vieyra Ferreyra, Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, María Belén Gómez, Damián



Gabriel Olivieri Brizuela, Jorge Daniel Cuevas, Ruth Noemí Díaz, Eduardo Enrique Mansilla, Mauricio Andrés Pizzi, Pablo Darío Barbieri, Rodolfo Luis Tapiero, Lucas Fernando Zopetto y otras personas aún no identificadas, habrían conformado y organizado, una asociación destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la comisión de un número indeterminado de ilícitos tributarios. Primero, a través de la emisión y venta de facturas manuales o electrónicas apócrifas a su nombre, a nombre de otras personas físicas -con o sin su consentimiento-, o de personas jurídicas integradas por cualquiera de todos ellos, utilizando sus claves fiscales y sin tener capacidad económica en general para proveer servicios y/o productos -en adelante 'usinas'- o en particular los servicios y/o productos facturados -en adelante 'usinas mixtas'-. Segundo, a través de la copia de facturas verdaderas de contribuyentes con capacidad económica a las cuales se les cambiarían los datos del cliente y los valores de la operación, en realidad inexistente. Todo ello con la finalidad de generar crédito fiscal espurio y/o gastos ficticios, en parte para disminuir la base imponible de los clientes de la organización en relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, y en parte para disimular la falta de capacidad económica de las propias 'usinas' y 'usinas mixtas' utilizadas para emitir facturas apócrifas, con excepción de los Municipios y Comunas -exentos de dichos impuestos- que aparecen entre los destinatarios de tales facturas. En relación a estos el uso de las facturas apócrifas tendría por objeto ocultar y/o disimular el verdadero destino dado a las sumas de dinero consignadas en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

dichos documentos" (cfr. requerimiento fiscal de instrucción de fecha 21 de agosto de 2020).

Por su parte, los magistrados de la instancia anterior sostuvieron que la competencia federal es de carácter excepcional y está determinada "por los delitos que afectan a personas, lugares o materias que por sus especiales características pongan en juego un interés concreto del Estado Federal...".

Indicaron que la declaración de incompetencia cuestionada "respeta y resguarda la autonomía provincial, reconociendo la competencia de la Justicia Ordinaria para conocer y decidir respecto de conflictos penales que involucran a sujetos de derecho privado, tales como las sociedades comerciales, y a sujetos de derecho público estatal de orden local, como la municipalidad y ente regional, todo en observancia del sistema federal de gobierno constitucionalmente instituido (conf. arts. 1 y 5 de la Constitución Nacional)".

Asimismo, señalaron que "que la posible infracción a los artículos 173 y 174 del Código Penal (defraudación por administración fraudulenta y defraudación por administración fraudulenta agravada) se presenta en este caso escindible de los demás ilícitos objeto de investigación (delitos tributarios y lavado de activos de origen ilícito), diferenciándose éstos en sus elementos objetivos y subjetivos, exigencias típicas de autoría, consumación o tentativa y bienes jurídicos tutelados con protección separada en la sistemática de nuestro Código Penal y en las leyes especiales".



En esa línea, afirmaron que las defraudaciones en cuestión constituyen delitos comunes sobre los que debe conocer la justicia provincial, sin que resulte de interés a este respecto quienes resultaren involucrados como responsables penalmente, "siempre que no configure una causal de competencia federal en orden a las personas".

Además, precisaron que "los presuntos sujetos pasivos del delito en cuestión serían entes jurídicos sobre los que no existen intereses comprometidos de orden patrimonial de la Nación, menos aún razones de soberanía nacional, como tampoco competencia federal con motivo de las personas involucradas".

Finalmente, manifestaron que "...la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se investiga una pluralidad de delitos corresponde separar el juzgamiento de aquéllos de naturaleza federal de los que son de índole común, aunque mediar entre ellos una relación de conexidad (Fallos: 318:2675; 321:2451; 323:772; 324:2086 y 325:261, entre otros). Ello, con la excepción de los casos de concurso ideal en los cuales se verifique una unidad de acción, lo cual entiendo no ocurre en este caso, no obstante se señale en ambas imputaciones el empleo de la misma modalidad comisiva, esto es, mediante la utilización de facturas apócrifas".

Dicha decisión fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal, con sustento en que tales conductas eran inescindibles de los restantes ilícitos perseguidos, por lo que consideró que convalidar lo decidido implicaría un grave retraso en el avance de la causa.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

En ese sentido, los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron que la estrecha vinculación que existe entre los delitos investigados hacía imposible su estudio por separado, por cuanto las facturas apócrifas emitidas por la asociación ilícita fiscal aquí investigada fueron las que facilitaron las maniobras de administración fraudulenta descriptas en los hechos que pretenden ser remitidos a la justicia ordinaria.

Conforme a las razones expuestas por la parte recurrente, considero que no corresponde declinar la competencia en favor del fuero común, por cuanto las particulares circunstancias del caso no permiten descartar que todos los hechos formen parte de un único contexto delictivo, en tanto mantienen una íntima vinculación entre sí, por lo que razones de economía procesal y una mejor administración de justicia aconsejan que su investigación quede a cargo de un único tribunal (CSJN, Fallos: 345:184, 328:4218 y Competencia CSJ 3570/2014/CS1 "Paglia, Norberto Ángel s/ estafa", resuelta el 23 de junio de 2015).

Por ello, propicio al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar el punto dispositivo VI de la resolución recurrida y su antecedente necesario y disponer que el Juzgado Federal de Córdoba n° 1 continúe conociendo en la investigación de los delitos de defraudación por administración fraudulenta - hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada



por ser cometida en perjuicio de una administración pública - hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-.

B) Sobreseimientos de Mario Morselli y Augusto Boero por los hechos 104 y 105

El Ministerio Público Fiscal y la querellante Unidad de Información Financiera cuestionaron el dictado de los sobreseimientos de Mario Morselli y Augusto Boero por los hechos 104 y 105 de lavado de dinero.

A tal fin, expresaron que de las piezas informativas aportadas a la causa surgían discrepancias entre las cuentas y las declaraciones presentadas por los imputados y que ello permitía suponer que carecían de capacidad patrimonial para las erogaciones realizadas.

Agregaron que, si bien habían sido sobreseídos por el delito de evasión tributaria agravada, la instrucción sobre el lavado de dinero no estaba completa, ya que no se había establecido aún la relación entre los bienes adquiridos y una actividad lícita.

Al resolver los sobreseimientos de Morselli y Boero, tanto por el hecho 87 de evasión tributaria como por los hechos 104 y 105 de lavado de dinero, el juez de grado explicó que la evasión que se les atribuía por la contribuyente MITRE S.A., era de \$1.026.150,45, y que correspondía al IVA del periodo 2017, mediante la adquisición de facturación apócrifa.

Recordó luego que, como producto de la entrada en vigencia de la ley 27.430, el régimen penal tributario allí





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

establecido fijó como límite mínimo para la figura de la evasión tributaria agravada por uso de facturas apócrifas, la suma de \$1.500.000.

Sobre dicha base y siguiendo los lineamientos del precedente "Vidal" del Máximo Tribunal (Fallos: 344:3156), indicó que la conducta atribuida como hecho 87 ya no encuadraba en una figura legal y dispuso el sobreseimiento de acuerdo al art. 336 inc. 3 del C.P.P.N.

Luego, al expedirse respecto de los hechos de lavado de activos numerados 104 y 105, argumentó que el Ministerio Público Fiscal, en su requerimiento de instrucción por la figura penal del art. 303 del C.P. estableció únicamente a la evasión como ilícito precedente, de modo tal que, habiéndose decidido el sobreseimiento por la evasión tributaria, correspondía adoptar idéntica solución para los hechos de lavado de activos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se refirió al punto al tratar los agravios contra los sobreseimientos por lavado de activos, pues el recurso del Ministerio Público Fiscal contra los sobreseimientos por la evasión tributaria numerada 87 fue desistido por esa parte.

En sus razones, los jueces consideraron que la evasión tributaria atribuida se encontraba amnistiada en el marco de la ley 27.541 y añadieron que, si bien el recurrente aducía que los hechos de lavado podrían tener origen en otros ilícitos diferentes, "...lo cierto es que el rédito económico material señalado por el acusador -objeto del presunto lavado posterior- tendría su origen en el ahorro fiscal y son justamente dichos



activos los cuales, mediante la amnistía fiscal (...) resultan ahora descontaminados”.

Ahora bien, se observa que, sin perjuicio de que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba mutó el motivo fundante de la desincriminación de Morselli y Boero por el hecho de evasión número 87, la solución a la que arribó respecto de los hechos de lavado de dinero numerados 104 y 105 sí coincide con la que siguió el juez de grado.

Luego, de los motivos de agravio del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera, se advierte que no suministran argumentos que permitan considerar que los hechos de lavado de activos 104 y 105 pudieran tener como ilícito precedente a una conducta diferente de la evasión tributaria numerada 87.

Frente a este panorama, corresponde señalar, por un lado, que la resolución impugnada cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779) y, por el otro, que las razones expuestas en las impugnaciones en trato no explicitan la alegada arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), ni los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605) o alguna cuestión federal debidamente fundada (Fallos: 328:1108).

Por ello, deben rechazarse los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera, en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

cuanto cuestionaron el punto dispositivo XIX -sobreseimientos de Mario Morselli y de Augusto Boero por los hechos 104 y 105-.

C) Sobreseimientos de Edsel Destefanis, Germán Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Arévalo, María Cecilia Ribera Ardiles y Federico Dellamigiore, por la contribuyente SOFTKEY S.A. respecto de los hechos nominados 75 y 76.

Suspensión de las acciones penales respecto de Eduardo Pinto, Leandro Srur y Martín Sarmiento, por la contribuyente COREBI S.A. en orden a los hechos 77 y 78; de Jonathan Suárez Cavalieri, por la contribuyente ALOO S.A., en orden al hecho 89; de César Capella, Oscar Luque y Fernando Sciarra Villalba, por la contribuyente HC3 GLOBAL RESEARCH GROUP S.A., en orden a los hechos 81 y 82; de PATRICIO GONZÁLEZ, por el hecho 85; de LEUTERIO BONETTO, por el hecho 86; y de Walter Ghione y Andrés Pollano, por la contribuyente GHIONE MONTAJES INDUSTRIALES S.R.L., en orden al hecho 90.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella conformada por la AFIP-DGI impugnaron las decisiones adoptadas para los antedichos causantes, respecto de los hechos que se les imputaban como evasiones de tributos.

En orden a ello, expresaron que no estaba acreditado que hubieran pagado los gastos y las costas causídicas y afirmaron que, de acuerdo al art. 10 de la ley 27.541, se trataba de una condición para obtener la extinción de la acción penal.

En conexión y en añadidura, el representante del Ministerio Público Fiscal formuló distintos agravios relativos a



la existencia de obstáculos para que se tuviera a los mencionados como incluidos en el régimen de la ley 27.541, a saber:

- sobre **Edsel Destefanis, Germán Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Arévalo, María Cecilia Ribera Ardiles y Federico Dellamigiore**, por la contribuyente **SOFTKEY S.A.**, adujo que no estaba definida aún la totalidad de los tributos evadidos, ya que no se había completado la fiscalización pedida por el juez de grado; que no se había analizado cuál era el origen del dinero que se utilizó para abonar en el marco de la ley 27.541 y que, por existir una imputación por lavado de dinero en contra de Germán Destefanis, no era irrazonable evaluar cuál era la procedencia del dinero;

- sobre **César Capella, Oscar Luque y Fernando Sciarra Villalba** por la contribuyente **HC3 GLOBAL RESEARCH GROUP S.A.** y **Walter Ghione y Andrés Pollano** por la contribuyente **GHIONE MONTAJES INDUSTRIALES S.R.L.**, señaló que no se había constatado que estuvieran cumpliendo con la regularización y que no existía un dictamen del organismo recaudador sobre si debían o no repatriar bienes para acceder al régimen de la ley 27.541;

- sobre **Jonathan Suárez Cavalieri**, por la contribuyente **ALOO S.A.**, precisó que no estaba completa la fiscalización sobre la sociedad y que no se conocía aún la totalidad de tributos evadidos; que no se había constatado una regularización; que no había un dictamen favorable sobre si correspondía o no que dicha contribuyente efectuara una repatriación de bienes desde el exterior para acogerse al régimen de la ley 27.541; y, que podrían llegar a existir miembros ocultos dentro de la persona





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

jurídica, pudiendo esto incidir sobre la incorporación al mencionado mecanismo de regularización de obligaciones tributarias;

- sobre **Patricio González y Leuterio Bonetto**, que no se había completado la fiscalización, que por lo tanto no estaba determinada la totalidad de los tributos objeto de las evasiones; que no se había constatado una regularización y que tampoco había dictamen favorable sobre si debían o no repatriar bienes para acceder al régimen de regularización de obligaciones tributarias de la ley 27.541.

C.1) Necesidad de abonar las costas y los gastos en el régimen de la ley 27.541

Al resolver, sobre la necesidad de que las costas y los gastos fueran abonados para obtener la extinción de la acción penal respecto de las evasiones tributarias, el tribunal de procedencia, expuso que, de acuerdo con la letra de los arts. 9 y 10 de la ley 27.541, no correspondía efectuar una aplicación analógica del requisito de pagar las costas y los gastos, pues esa condición había sido establecida para quienes tuvieran deudas en curso de discusión administrativa o judicial.

Enfatizaron que, conforme al ya mencionado art. 9, no podían establecerse condiciones adicionales para la adhesión al régimen; que el cobro de las obligaciones evadidas y el recupero de dinero no eran el objeto de esta causa; que si la AFIP consideraba que existían costas y gastos pendientes debía acudir a la vía correspondiente para su cobro, y que la R.G. AFIP 4816/2020 establecía que el organismo debía iniciar acciones



legales si los conceptos discutidos no eran abonados en forma y plazo.

Señalaron que el *quantum* de las costas y los gastos no habían sido regulados aún, sino que habían sido calculados e informados de manera unilateral por la AFIP.

Así, concluyeron que *"...la exigencia de asumir el pago de las costas y gastos causídicos no está prevista para los casos de causas penales tributarias..."*.

Expuestos esos antecedentes, adelanto que considero que les asiste razón en el punto al Ministerio Público Fiscal y a las representantes de la querellante AFIP-DGI.

En primer orden, debe repararse que el mecanismo de regularización de obligaciones tributarias contenido en la ley 27.541 reviste carácter excepcional (cfr. art. 11), por lo que *"...la regla hermenéutica que impera en orden a la asignación de sus alcances exige considerar con estrictez y apego la letra de sus preceptos..."* (Fallos: 345:849, relativo al régimen de la ley 27.260, sustancialmente análogo al de la ley 27.541).

En este sentido, cierto es que, por regla del art. 530 del C.P.P.N., las costas y los gastos han de imponerse con el dictado de la resolución que ponga término a la causa -para el caso, sería el dictado del sobreseimiento por extinción de la acción penal-.

Sin embargo, no puede perderse de vista el carácter singular que reviste el mecanismo en estudio y la circunstancia de que la extinción de la acción penal se halla sujeta a "[l]a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen...".

Repárese en que, en la órbita del régimen penal tributario, la consecuencia de la aplicación del Título IV de la ley 27.541, es permitir a quien regulariza la deuda fiscal de la cual se deriva la imputación, obtener primero la suspensión de la acción penal -por acogimiento al sistema- y luego la extinción del *ius puniendi* -por cancelación total de la deuda-.

Es decir, queda eliminada en forma excepcional la viabilidad del ejercicio de la competencia sancionatoria penal estatal, frente a quien sea reputado responsable por un delito consistente en el incumplimiento de una obligación tributaria, mediante el otorgamiento de preeminencia a un instrumento de carácter recaudatorio de deudas fiscales incumplidas.

Siguiendo tal cuadro, en el *sub lite* advierto que existe un procedimiento judicial en marcha, cuyo objeto es esencialmente la definición de si existen responsabilidades penales resultantes, pero que también implicó la determinación sobre la cuantía final de las obligaciones tributarias que se habrían evadido. Así, partiendo de la propia letra de la ley 27.541, se extrae que el requirente que pretenda obtener las consecuencias allí fijadas deberá, en primer lugar, asumir -hacerse cargo- del pago de las costas y gastos generados por la instrumentación del proceso penal y luego cancelar en forma total la deuda.

No es óbice a la solución propiciada el hecho de que las costas y gastos no hubieran sido reguladas aún, pues la causa



deberá regresar a la instancia de origen, a fin de que se complete la sustanciación atinente y, luego de ello, se dicte una nueva decisión, con ajuste a lo expuesto.

**C.2) Situación de los imputados por la contribuyente
SOFTKEY S.A.**

La conclusión a la que se arriba en el punto C.1 incide, en lo inmediato, sobre la situación de quienes han obtenido la extinción de la acción penal por aplicación de la ley 27.541.

Ahora bien, conocido el criterio concordante que han adoptado mis colegas respecto de esta contribuyente y de los hechos que han sido imputados a sus integrantes, me limitaré a indicar que corresponde hacer lugar en este punto a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la querellante AFIP-DGI y, con el alcance indicado, revocar el sobreseimiento de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, debiendo la causa proseguir en la instancia de origen según su estado.

**C.3) Situación de los imputados por las contribuyentes
HC3 GLOBAL RESEARCH GROUP S.A. y GHIONE MONTAJES INDUSTRIALES
S.R.L.**

Para con los imputados que integraban estas personas jurídicas, el Ministerio Público Fiscal señaló que no se había constatado que estuvieran cumpliendo con la regularización y que no existía un dictamen del organismo recaudador sobre si debían o no repatriar bienes para acceder al régimen de la ley 27.541.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

C.3.1) HC3 GLOBAL RESEARCH GROUP S.A.

Al expedirse sobre la suspensión de las acciones penales por las conductas de evasión tributaria atribuidas a Cappella, Luque y Sciarra Villalba, el juez de grado recordó que resultaban ser presidentes y directores de la empresa HC3 GLOBAL RESEARCH GROUP S.A. y que se les imputaban, por esta especie de delitos, los hechos numerados 81 y 82 del requerimiento de instrucción, por presuntamente haber evadido el pago del IVA de los periodos 2018 y 2019.

Indicó que en el informe de AFIP de fs. 6093 se detallaba que todos los tributos presuntamente evadidos habían sido incorporados a planes de pago presentados por la empresa y aceptados por el ente recaudador. Agregó que dichos planes se encontraban vigentes y que restaba todavía el pago de algunas de sus cuotas.

Sobre dicha base, estimó que correspondía ordenar la suspensión de la acción penal por los hechos 81 y 82 de evasión tributaria.

El fiscal objetó el criterio, aduciendo que se citaba el art. 10 de la ley 27.541 sin valorar de manera integral lo allí normado, que no se había constatado la regularización y que el art. 8 de la misma ley excluía de la posibilidad de acogerse a ciertos sujetos, entre ellos quienes tuvieran activos financieros en el exterior, si es que no efectuaban la repatriación de un porcentaje.



La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el temperamento seguido por el juez de grado, sin añadir nuevos argumentos sobre las cuestiones aquí discutidas.

Sentado ello, corresponde indicar que, de acuerdo al informe de AFIP de fs. 6093, HC3 GLOBAL RESEARCH S.R.L., en el marco de la ley 27.562 -ampliatoria del régimen de la ley 27.541-, se acogió a los planes 0354749, 0348389 y 0055095, que se encontraban vigentes a la fecha de emisión del informe.

En cuanto a la aptitud de los contribuyentes para acogerse al régimen de regularización de obligaciones tributarias, cabe destacar que, de acuerdo con el art. 17 de la ley 27.541, la AFIP es el organismo encargado de dictar la normativa complementaria para reglamentar las formas de acceso al programa.

A ese respecto, el texto de la R.G. 4816/2020 estableció el procedimiento para la adhesión al régimen de regularización de la ley 27.541 modificada por la ley 27.562, determinando que es ante la propia AFIP que debe iniciarse la solicitud.

Por lo tanto, si el ente recaudador, en el marco de sus competencias, aceptó a HC3 GLOBAL RESEARCH S.R.L. como sujeto apto para su inserción en este régimen legal -lo cual se desprende del informe de fs. 6093-, la sola aseveración del Ministerio Público Fiscal, desprovista de elementos puntuales de convicción, indicando que la contribuyente podría no cumplir con todas las condiciones exigibles para ello, resulta insuficiente para resolver en el sentido pretendido y no puede ser receptada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Luego, en lo referente al agravio sobre si se constató o no que la contribuyente que integraban estuviera cumpliendo con la regularización asumida, cabe señalar que, en el requerimiento de instrucción, se imputó a los nombrados que "...durante el periodo fiscal, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (...) habrían computado un crédito fiscal espurio de por lo menos \$2.456.322,54 extraído de las facturas apócrifas de (...) presuntamente emitidas entre 3/2018 y 12/2018..." -hecho 81- y que "...durante el periodo fiscal 2019, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (...) habrían computado un crédito fiscal espurio de por lo menos \$2.877.743,82 extraído de las facturas apócrifas de (...) presuntamente emitidas y proveídas entre 1/2019 y 11/2019..." -hecho 82-.

Finalmente, que de acuerdo al informe de AFIP de fs. 6093, la contribuyente incluyó en los planes de pago 0354749, 0348389 y 0055098 la totalidad de los periodos imputados y esas vías administrativas estaban vigentes, por lo que no pueden ser de recibo los agravios del Ministerio Público Fiscal poniendo en cuestión si los imputados se encontraban cumpliendo con el régimen de regularización asumido.

C.3.2) GHIONE MONTAJES INDUSTRIALES S.R.L.

Al pronunciarse sobre la suspensión de la acción penal seguida a los imputados Walter Ghione y Andrés Pollano imputados por el hecho numerado 90 -evasión agravada del IVA, periodo 2020 por la contribuyente GHIONE MONTAJE INDUSTRIAL S.R.L.-, el juez de grado indicó que, de acuerdo al informe de AFIP de fs. 6093, la empresa que integraban había presentado dos planes de pago en



el marco de la ley 27.562, los nominados N650744 y N954583, que se encontraban vigentes y que incluían toda la deuda que el fiscal les imputó en su requerimiento de instrucción del 21/8/20. Por ello, el juez dispuso la suspensión de la acción penal por el hecho 90.

Al igual que en los casos anteriores, el Ministerio Público Fiscal apeló el respectivo punto resolutorio, alegando que no estaba constatada la regularización y que no se había determinado si la contribuyente debía repatriar bienes para poder acogerse al régimen de la ley 27.541.

En su intervención, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el criterio del juez de grado, sin añadir nuevos argumentos.

Sentado ello, en cuanto a la aptitud de los contribuyentes para acogerse al régimen de regularización de obligaciones tributarias, caben aquí iguales consideraciones que para el caso de HC3 GLOBAL RESEARCH GROUP S.A.

Si el propio ente recaudador, en el marco de sus competencias, aceptó a GHIONE MONTAJE INDUSTRIAL S.R.L. como sujeto apto para su inserción en este régimen legal -lo cual se desprende del informe de fs. 6093-, la sola aseveración del Ministerio Público Fiscal, desprovista de elementos puntuales de convicción, indicando que la contribuyente podría no cumplir con todas las condiciones exigibles para ello, resulta insuficiente para adoptar otro temperamento y no puede ser de recibo.

En cuanto a la constatación o no de si la contribuyente estaba cumpliendo con la regularización, corresponde recordar que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Ghione y Pollano fueron imputados en el hecho 90 por la presunta evasión agravada del IVA periodo fiscal 2020, por un monto de por lo menos \$5.346.431,92, *"...crédito fiscal espurio extraído de las facturas apócrifas de (...) presuntamente emitidas y proveídas entre 6/2019 y 12/2019..."*.

En el informe de AFIP de fs. 6093 consta que la empresa se acogió a dos planes de pago en el marco de la ley 27.541, el M891390 y el N954583. Surge también que, el plan M891390 incluyó deudas por IVA del periodo 6 de 2019 y que el N954583 incluyó deudas del mismo impuesto de los periodos 6, 11 y 12 de 2019 y 1 de 2020. Finalmente, se hizo constar que, al 18/6/21, ambos planes estaban vigentes.

Bajo tales condiciones, no pueden ser receptados los agravios del Ministerio Público Fiscal poniendo en cuestión si los imputados se encuentran cumpliendo con el régimen de regularización asumido.

C.4) Situación de Jonathan Suárez Cavalieri, imputado por la contribuyente ALOO S.A.

Respecto de este imputado, el Ministerio Público Fiscal precisó que no estaba completa la fiscalización sobre la sociedad que integraba y que no se conocía entonces la totalidad de tributos evadidos; que no se había constatado una regularización; que no había un dictamen favorable sobre si correspondía o no que dicha contribuyente efectuara una repatriación de bienes desde el exterior para acogerse al régimen de la ley 27.541; y, que podrían llegar a existir miembros ocultos dentro de la persona jurídica, pudiendo esto incidir sobre la incorporación al



mencionado mecanismo de regularización de obligaciones tributarias.

En su decisión, el juez de grado recordó que a Jonathan Suárez Cavalieri se le imputaba, como hecho 80, en su carácter de presidente, contador y administrador de relaciones de clave fiscal de la empresa ALOO S.A., la presunta evasión del IVA, periodo 2019, por \$2.187.195,33.

Indicó que, de acuerdo con el informe de fs. 6093, la empresa había suscripto el plan de pagos N° 0364978 y que allí incluyó la deuda que correspondería al IVA de 2019. Remarcó que el plan estaba aceptado, vigente y que restaba la cancelación de algunas de sus cuotas.

Aclaró que, en el informe final sobre la contribuyente, producido en el marco de la orden de intervención 1835880, la AFIP había hecho constar que, si bien impugnó a la empresa el crédito fiscal del IVA periodo 2019 por un monto de \$3.256.622,30, la contribuyente había aceptado las diferencias y había presentado declaraciones juradas rectificativas de dichos impuestos "...(*i.e. plan N° 0364978*)..." y afirmó que, según el mismo organismo recaudador, "...*con los ajustes detallados (...) se satisface totalmente la pretensión fiscal*".

Sobre dicha base, el juez de grado dispuso suspender la acción penal seguida por el hecho 80, contra Jonathan Nahuel Suárez Cavalieri.

Al apelar el punto dispositivo pertinente, el Ministerio Público Fiscal dijo que no existía un dictamen de AFIP sobre si correspondía la extinción de la acción penal, que se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

decidió la suspensión de la acción penal aun cuando la fiscalización no se había completado y que faltaba un dictamen sobre si correspondía que el imputado repatriara bienes del exterior.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el criterio del juez de grado, sin añadir nuevos argumentos.

A fin de resolver, debe señalarse que, en el requerimiento de instrucción el 20/8/21, el Ministerio Público Fiscal afirmó que, como hecho 80, Jonathan Suárez Cavalieri, en su carácter de presidente, contador y administrador de relaciones de clave fiscal de la empresa ALOO S.A. *"habría computado un crédito fiscal espurio de por lo menos \$2.187.195, extraído de las facturas apócrifas de (...) presuntamente emitidas y proveídas entre 3/2019 y 6/2019..."*. A la vez, pidió también para esta empresa que AFIP, en el marco del art. 18 del régimen penal tributario de la ley 27.430, verificara y determinara la deuda tributaria por IVA.

En el informe de fs. 6093, AFIP indicó que ALOO S.A. se acogió al plan 0364978 en el marco de la ley 27.562, por deudas de impuestos, más no detalló qué tributos comprendía ni qué periodos fiscales.

Luego, en el informe final de inspección (incorporado a Lex 100 el 22/9/21), producido tras el requerimiento efectuado por el art. 18 del régimen penal tributario, AFIP indicó que, por el IVA 2019, entre los periodos 1/19 a 7/19, surgía un saldo a ingresar de \$3.183.182,27 y que dicha suma había sido incluida en el plan de pagos 0364978.



Por ello, se observa que, como en los casos anteriores, la AFIP aceptó a la contribuyente dentro del régimen de la ley 27.541, que de acuerdo al mismo organismo, la deuda tributaria que fundaría la evasión imputada (IVA 2019, facturas emitidas entre el 3/19 y el 6/19) quedó incluida en el plan de pagos 0364978 y que, a la fecha en que AFIP emitió sus informes, el plan estaba vigente.

En cuanto a la posible existencia de socios ocultos dentro de ALOO S.A., observo que el recurrente no brinda precisiones sobre quiénes serían tales sujetos ocultos, sino que se limita a explicar que *"...hay algunos indicios que permiten afirmar que pueden llegar a existir socios ocultos dentro de la entidad societaria..."*. Conjunto a ello, debe recordarse que estamos ante un estadio provisorio de la causa, ya que no se ha dictado el sobreseimiento de Suárez Cavalieri, sino la suspensión de la acción penal.

Por lo tanto, en caso de que surjan motivos concretos que permitan evaluar que por ALOO S.A. intervino alguna persona encuadrada en las causales de exclusión del art. 16 de la ley 27.541, podrá revisarse el temperamento.

En suma, no pueden ser de recibo los agravios del Ministerio Público Fiscal poniendo en cuestión si el imputado estaba en condiciones de ser incorporado al régimen de regularización y si se hallaba cumpliendo con él.

C.5) Situación de Patricio González

Al decidir sobre este imputado por el hecho numerado 85 -evasión agravada de IVA, periodo 2019- el juez de grado señaló





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

que, de acuerdo a lo informado por AFIP a fs. 6093, el causante había ingresado en tres planes de pago, por la totalidad de la deuda reclamada y que, si bien restaba aún el pago de algunas cuotas, a ese momento todos estaban vigentes.

Sobre dicha base, concluyó que estaban cumplidos todos los requisitos que la ley 27.541 establecía en la primera parte de su art. 10, de modo que correspondía suspender la acción penal en cuanto al hecho de evasión de impuestos agravada por utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas.

El criterio fue materia de apelación por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien ya en aquella instancia indicó que no se había podido constatar la regularización y que tampoco existía un dictamen favorable respecto de si correspondía o no que González repatriara bienes desde el exterior.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al emitir su decisión, confirmó el criterio de juez de grado, sin incorporar nuevos motivos fundantes.

A fin de dar respuesta a los agravios del Ministerio Público Fiscal, debe tenerse en cuenta que, en el requerimiento de instrucción del 21/8/20, dicha parte le imputó a González el hecho 85, consistente en la evasión del IVA del año 2019, en "... por lo menos \$1.825.751,97. extraído de las facturas apócrifas de (...) presuntamente emitidas y proveídas entre 1/2019 y 12/2019...". Además, pidió como medida de prueba que la AFIP-DGI efectuara para con el causante, un procedimiento de verificación y



determinación de la deuda tributaria con relación a dicho impuesto. El juez ordenó la medida el 25/8/20.

La AFIP presentó el informe en el expediente principal el 4/8/23 -es decir con posterioridad a que el juez de grado dictara la suspensión de la acción penal en favor de González- y allí precisó que "...esta Administración comprobó que el contribuyente había computado crédito fiscal apócrifo en IVA durante el periodo fiscal 2019 por un monto total de \$1.981.704,11..." -es decir, un monto superior a aquél indicado en el requerimiento de instrucción y tomado en cuenta por el juez de grado para el dictado de la suspensión de la acción-.

Además, el organismo recaudador indicó también que "...el Sr. González fue rectificando las declaraciones juradas de IVA del periodo 2019 y los saldos fueron incluidos en los siguientes planes de facilidades de pago N947486 Ley 27562, N947190 Ley 27562, y 0222662 Ley 27652, los cuales se encuentran vigentes a la fecha".

Por lo tanto, de lo reseñado se extrae para Patricio González, que si bien el dictado de la suspensión de la acción por el hecho 85 fue dictada por el juez de grado en forma previa a que la AFIP culminara las tareas de determinación que habían sido requeridas por el propio juzgado el 25/8/20, del contenido de lo informado surge que el organismo tributario aceptó a Patricio González como sujeto apto para acogerse al régimen de regularización de obligaciones fiscales de la ley 27.562 y que la totalidad de la deuda que se le reclamaba por el IVA 2019, fue incluida en los planes de pago N947486, N947190 y 0222662, es





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

decir, aquellos meritados por el juez de grado para arribar a su decisión.

Bajo tal cuadro, no es posible sostener que no es procedente el acogimiento de Patricio González al régimen de regularización de la ley 27.541. A la vez, no se ha constatado que no esté cumpliendo con el plan de regularización asumido por el hecho 85, por lo que no serán receptados los agravios del Ministerio Público Fiscal.

C.6) Situación de Leuterio Carlos Bonetto

El juez de grado dispuso la suspensión de la acción penal seguida a Bonetto por evasión tributaria agravada del IVA periodo 2019 -hecho numerado 86-, meritando que, de acuerdo a lo requerido por la defensa y a lo informado por AFIP, el imputado suscribió tres planes de pago, que incluían todos los meses del periodo 2019 del tributo cuya evasión se imputaba y que, de los tres, uno estaba cancelado en su totalidad y los restantes estaban vigentes, faltando el pago de algunas cuotas.

Afirmó el magistrado que *"...el imputado incluyó todos los períodos e impuestos que el Fiscal le endilga por el delito de evasión tributaria agravada (IVA 2019) y además, los montos de los planes de pagos regularizados abarcan acabadamente la suma [de \$2.029.549,32] que el Sr. Fiscal le imputó..."*, por lo que concluyó que estaban cumplidos todos los requisitos que el art. 10 de la ley 27.541 establecía.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el criterio del juez de grado, sin añadir nuevos argumentos.



Para resolver los planteos casatorios del fiscal en punto a Bonetto, debe tenerse en cuenta que, al dictaminar respecto de la solicitud de extinción de la acción penal efectuada por la defensa de este imputado a raíz del pretense acogimiento al régimen de regularización mencionado, el 28/10/20 el representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó que AFIP informara -entre otros aspectos- si aquel había efectuado el pago completo, si era una persona categorizada como "pequeño contribuyente", si poseía activos en el exterior y si hubo repatriación de los mismos.

Desde AFIP respondieron el 28/12/20, indicando que aún no había certeza sobre si los montos abonados por Bonetto abarcaban o no la totalidad de sus deudas por el IVA 2019, ya que existía a ese momento una inspección en curso, que había sido pedida como medida de prueba por el Ministerio Público Fiscal y ordenada a AFIP por la judicatura (cfr. oficio remitido el 25/8/20). Por otro lado, señalaron que "...el Sr. Bonetto se encuentra caracterizado como 'Pequeño contribuyente' en los términos de la Ley 27.562 desde el 17-09-2020", pero no precisaron si se trataba de un sujeto con activos en el exterior y si hubo alguna repatriación.

A *posteriori* del ya mencionado pedido de informes efectuado por el juez de grado el 8/6/21, el 8/7/21 AFIP indicó que Carlos Leuterio Bonetto se había acogido a dos planes de pago en el marco de la ley 27.541, esto es, los nominados N855807 y 0496077, estando el primero completamente cancelado y el segundo en curso de cancelación, restando 114 cuotas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Por otra parte, conforme al requerimiento fiscal de instrucción, como hecho 86, se atribuía a Bonetto la evasión agravada del IVA de *"...por lo menos \$2.029.549,32. extraídos de las facturas apócrifas de (...) presuntamente emitidas y proveídas entre 5/2019 y 12/2019..."*. Además, fue en dicha pieza que el Ministerio Público Fiscal solicitó que se verificara y determinara la deuda tributaria de Bonetto por IVA 2019.

Por último, de acuerdo al informe final de inspección, aportado por AFIP e incorporado al Sistema Lex 100 el 26/7/22, la determinación y verificación que pidió el fiscal arrojó que, además de la deuda de \$2.029.964 inicialmente atribuida, también por el IVA 2019 resultaban diferencias derivadas de conceptos que AFIP reflejó como "impugnación de facturas apócrifas" por \$860.342 y "ventas por impugnación de pasivos apócrifos" por \$625.613. Se precisó allí además que, el primer monto se incluyó en el plan de moratoria de la ley 27.562 nominado 0496077, mientras que el segundo fue incluido en el plan nominado 0570613, no regido por dicha ley, sino por la R.G. AFIP 4268/2018.

De tales extremos se extrae que: 1) que AFIP aceptó a Leuterio Carlos Bonetto como sujeto que podía acogerse al mecanismo de regularización de deudas de la ley 27.562, pues así surge de los informes del 8/7/21 y del 27/6/22, por lo que no puede receptarse la queja del fiscal en cuanto a la falta de dictamen relativo a si este imputado debía o no repatriar bienes, ya que el propio organismo recaudador, en el marco de sus competencias, le permitió incorporarse al régimen excepcional; 2) que la deuda fundante de la imputación por el hecho 86 de evasión



agravada del IVA 2019, sería mayor a aquella que el fiscal le endilgó provisoriamente en su requerimiento de instrucción del 21/8/20 y, 3) que resulta factible que el total de la deuda de Bonetto subsumible en la imputación por el hecho 86 no haya sido regularizada a través de la ley 27.541, pues el último tramo de deuda informado por AFIP el 26/7/22 se regularizó, pero mediante un régimen ajeno a la ley 27.562 y que no conllevaría las mismas consecuencias sobre la acción penal.

Esas circunstancias deberán ser nuevamente analizadas y valoradas en la instancia de origen, dado que, en lo aquí pertinente, le asiste razón al fiscal en cuanto a que al decidirse la suspensión de la acción penal en favor de Bonetto por el hecho 86, no estaba constatada aún cuál era la totalidad de la deuda que correspondía imputar, por lo que el criterio adoptado resultó prematuro.

Lo expuesto para el caso de este imputado, incide a su vez sobre la suspensión de la acción penal que se dispuso respecto del hecho numerado 113 y reputado como lavado de activos, por lo que corresponde anular la suspensión dictada tanto por el hecho 86, como por el numerado 113.

D) Situación de Martín Sarmiento, César Capella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Srur, Eduardo Pinto y Patricio Rolando González en punto a la suspensión de las acciones penales por los hechos 100, 106, 107, 110, 111, y 112, encuadrados como lavado de activos

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

incurrió en un error al entender que la evasión tributaria era el ilícito precedente al lavado de activos -y consecuentemente suspender las acciones penales por esa última figura penal-.

Para sustentar su posición, aseveró que, en esta causa, la comisión del tipo penal del art. 303 del C.P. estaría relacionada además con la asociación ilícita fiscal y las alteraciones dolosas de registros, entre otros delitos.

En tal sentido, sintetizó su tesis alegando que "...la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico..." .

A su turno, la Unidad de Información Financiera formuló agravios en similares términos, al decir que el sustrato fáctico de la causa se componía por hechos de evasión tributaria, por defraudaciones y por conductas calificadas como lavado de activos.

En ese orden, los representantes manifestaron que el tipo penal del art. 303 del C.P. no requería establecer una relación de hecho principal y hecho dependiente, puesto que el lavado de activos revestía autonomía y bastaba con establecer su vinculación razonable con un ilícito previo.

En añadidura, los letrados por esa querella indicaron que el dictado del sobreseimiento por los ilícitos tributarios por extinción de la acción penal no impedía que se considerara a los imputados como responsables por las conductas posteriores



objeto de pesquisa, de haber ingresado al mercado legal activos de origen espurio, ya que allí el bien jurídico afectado era otro.

Al resolver sobre tales puntos, el tribunal de procedencia destacó que, para que un hecho pudiera ser considerado como ilícito precedente del lavado de activos, bastaba con que se hubiera configurado un injusto penal, con suficiencia en los caracteres de tipicidad y antijuridicidad.

Los jueces intervinientes señalaron que aquellas leyes que posibilitaban la extinción de la acción penal por regularización de obligaciones fiscales adeudadas debían encuadrarse como amnistías dictadas por el Poder Legislativo de la Nación.

Describieron que "el efecto de la amnistía consiste en borrar la criminalidad del hecho y suele dictarse por razones de orden público, de política criminal y de política económica. La amnistía (...) suprime la criminalidad del delito, aun cuando no deroga el delito como tal, ni el tipo penal previsto en la norma".

Indicaron que se trataba de un acto de soberanía interna del Estado que, por razones de orden público e inspirado en el propósito de evitar un perjuicio mayor mediante un mal menor, declaraba el olvido de infracciones de naturaleza penal y producía la extinción de las consecuencias represivas atinentes a dicha rama del ordenamiento, aunque sin borrar en forma total la ilicitud, ya que de acuerdo con el art. 61 del C.P., quedaba





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

subsistente la posibilidad de reclamar indemnizaciones a causa del hecho.

Con cita de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, refirieron que la amnistía borraba el carácter de ilícito penal del hecho y concluyeron que aunque las leyes de regularización de obligaciones fiscales no dictaran expresamente una amnistía por el delito de lavado de activos "...este queda 'contagiado' por el olvido (...) respecto del delito de evasión. Podrá haber persecución por lavado de dinero, pero obviamente no podrá tener como sustento la evasión pues ha sido 'olvidada'".

Recordaron que el Ministerio Público Fiscal había argumentado que los bienes objeto de lavado podrían tener origen no solo en los delitos tributarios, sino también en las defraudaciones por administración fraudulenta, pero resaltaron que "...el rédito económico material señalado por el acusador - objeto del presunto lavado posterior- tendría su origen en el ahorro fiscal y son justamente dichos activos los cuales, mediante la amnistía fiscal y penal establecida por ley, resultan (...) descontaminados de ilicitud".

Sobre dicha base y en lo referente a los imputados Martín Alejandro Sarmiento, César Eduardo Cappella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Paolo Srur, Eduardo Pinto y Patricio Rolando González por los hechos calificados como lavado de activos, meritaron que la ley le ofrecía al contribuyente la posibilidad de poner fin a la acción abonando la totalidad de la deuda y que se admitía que ello se realizara mediante un régimen de facilidades de pago, de modo que el otorgamiento de un plazo



para cumplir con las obligaciones asumidas importaba la suspensión del trámite del proceso, hasta tanto se completara la totalidad de los pagos o se produjera la caducidad de los planes.

Efectuada esa reseña y a fin de resolver sobre las cuestiones planteadas, hay que remarcar que, la instrucción de los hechos tenidos como lavado de activos y numerados 100, 106, 107, 110, 111, y 112 fue requerida por el Ministerio Público Fiscal en la pieza del 30/12/20.

Allí, los únicos ilícitos concretamente vinculados como precedentes al lavado de activos habrían sido las evasiones tributarias agravadas de cada uno de los antes nombrados.

Bajo tales condiciones, la solución adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en cuanto dispuso suspender las acciones penales para tales hechos 100, 106, 107, 110, 111 y 112 hasta tanto los imputados cancelaran en forma total los planes de pago por las obligaciones fiscales adeudadas o bien caducaran dichas vías administrativas, no se presenta -por el momento y de acuerdo con la información precisada por las partes acusadoras en sus recursos- como irrazonable y debe ser confirmada.

E) Situación procesal de Cristian Debarre

La defensa cuestionó el procesamiento de Cristian Debarre dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por considerarlo, con el grado de probabilidad exigido por el artículo 306 del C.P.P.N., partícipe necesario del delito de asociación ilícita fiscal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Precisó que su defendido no tomó parte en la estructura criminal, sino que representaba a la sociedad anónima "CORPHONE S.A.", a la cual se la atribuía haber evadido impuestos en forma autónoma e independiente de la asociación ilícita tributaria y que, en dicho marco, se limitó a requerir facturas apócrifas, siendo así únicamente un cliente de la asociación criminal.

Respecto a las operaciones de descuento de cheques con fondos propios que realizó Debarre en favor de Diego Vieyra Ferreyra, alegó que atento la insignificancia de los montos de dichos cheques en relación al volumen total manejado por la organización criminal, no podía caracterizarse a tales acciones como aporte, colaboración o ayuda típica con una agrupación cuyo objeto era la venta de facturas apócrifas.

Por otra parte, agregó que no toda la actividad económica de Diego Vieyra Ferreyra era ilícita y que el descuento de cheques con Debarre era independiente de la producción de facturas.

Indicó que solo podía ser tenido como cómplice aquel que efectuara una contribución que ayudara al autor en la comisión de un hecho delictivo específico y que no bastaba una colaboración general.

Expuso que el tribunal de la instancia anterior basó su decisión en pautas de excesiva latitud. Solicitó que se anulara la resolución recurrida y que se confirmara el sobreseimiento de Cristian Debarre por el hecho calificado como asociación ilícita fiscal, de acuerdo al artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal de la Nación.



Es dable aquí reseñar los antecedentes que condujeron al tópico en estudio. Al ampliar su requerimiento de instrucción, el representante del Ministerio Público Fiscal refirió que correspondía incluir a Cristian Debarre como coautor del delito de asociación ilícita. En tal sentido, indicó que Debarre *"habría sido el encargado de solicitar la confección de la facturación falsa emitida por la asociación ilícita, fijando los montos y descripciones que debían ser incluidos en la misma, y además de ello, se encargaba de descontar los cheques obtenidos como retorno de la facturación así emitida. Así, según surge de los manuscritos secuestrados en el allanamiento, Cristian Debarre habría sido la persona encargada de determinar cómo se repartiría el provecho del IVA facturado por erogaciones de Corphone S.A."*. Además, sostuvo que la prueba producida daba cuenta de que Debarre *"era la fuente originaria de mensualidades dinerarias que habría pagado a otro director -que nunca trabajó en Corphone-"*.

El magistrado de grado ponderó que se le imputó a Debarre el delito de asociación ilícita por dos conductas: la confección de la facturación apócrifa emitida y el descuento de los cheques obtenidos como retorno por esa operatoria que llevaba a cabo la agrupación.

En cuanto a la facturación apócrifa, con el detalle de los montos y la descripción del concepto, puntualizó que es la conducta esperable de cualquier "cliente" de la asociación que quiere adquirir el servicio ofrecido, que al efectivizarse, produce una evasión de impuestos en contra del Fisco.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

En torno al punto, consideró que numerosa prueba daba cuenta de la existencia de presuntos clientes de la organización que solicitaban facturación, con el detalle relacionado a su actividad comercial, en miras de generar el crédito fiscal, sin que ello significara que dichos clientes fueran partícipes de la asociación ilícita. Estimó que era lógico pensar que, para que hubiera una organización que ofrecía servicios ilícitos, era necesario que haya clientes que los adquirieran, pero que ello no implica que tales adquirentes formaran parte de la organización, sino que justamente pagaban por los servicios de la asociación.

De acuerdo a dicho razonamiento, el magistrado concluyó que la circunstancia de haber solicitado facturación apócrifa no configuraba en los hechos la actividad propia de un miembro de la asociación ilícita fiscal.

Por otro lado, evaluó que si bien quedó demostrado con grado de probabilidad suficiente que Cristian Debarre realizaba el descuento de algunos de los cheques adquiridos por Diego Alberto Vieyra Ferreyra, resultaba necesario *"analizar el grado de aporte que implica la actividad que Debarre realizaba en favor de la organización"*.

En dicha inteligencia, refirió que el descuento de cheques era un negocio cambiario, vinculado estrictamente a la actividad comercial y que tenía su fundamento en la naturaleza jurídica del título valor, que es la de ser un instrumento de fácil transmisibilidad. Seguidamente, indicó que, *prima facie*, la conducta desplegada por Debarre no se encontraba vinculada a un



delito, sino que se relacionaba íntimamente con la faz dinámica de la actividad comercial.

En esa línea, afirmó que para formar parte de una asociación ilícita fiscal, se requería que el individuo realizara un aporte positivo a la vida de la organización, y que su participación hubiera sido tal que, si no existiera, el delito no habría podido cometerse.

Consideró que, en este caso, el aporte de Debarre era "fungible", por cuanto Vieyra Ferreyra podría haber realizado el descuento de los cheques con cualquier otro prestador de dicho servicio, tal como surgía de los mensajes de *Whatsapp* enviados entre ambos protagonistas.

En consecuencia, concluyó que las conductas desplegadas por Cristian Debarre no se relacionaban con la actividad propia de un miembro de una asociación ilícita fiscal, que el imputado pudo haber cooperado de alguna manera con la organización; que el cambio de cheques que habría realizado Debarre resultó relevante más no imprescindible ni indispensable para la conformación y funcionamiento de la asociación ilícita y que, en definitiva, su aporte no había sido suficiente para tenerlo por parte de dicho grupo delictivo.

Conforme a ello, el 9 de diciembre de 2021, el magistrado instructor resolvió, en lo que aquí interesa, "... *SOBRESEER a Cristian Debarre del delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. 'c' de la Ley 27.430), en carácter de autor (art. 45 del C.P.) conforme a lo establecido en el art. 336, inc.3 del C.P.P.N.*".





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Esta resolución fue impugnada por el fiscal y por la AFIP, lo que motivó la decisión que ahora llega cuestionada.

Para fundar la revocatoria del sobreseimiento y el dictado de un procesamiento, los jueces de la Cámara a quo consideraron que de las pruebas producidas hasta el momento habían surgido indicios suficientes para el dictado de un auto de mérito.

Para arribar a la decisión cuestionada por la defensa, los jueces de la instancia anterior valoraron que, de las comunicaciones telefónicas interceptadas, se desprendía que el imputado Cristian Debarre mantenía trato fluido con el líder de la banda, Diego Vieyra Ferreyra y *"habría sido uno de los principales clientes de las facturas apócrifas emitidas por la organización para pagar menos impuestos"*.

Además, destacaron que la empresa cuyo dominio efectivo detentaba Cristian Debarre, "CORPHONE S.A.", declaró más de 40 millones pesos de crédito fiscal espurio proveniente de la asociación ilícita y que *"las visitas periódicas que habría realizado Vieyra Ferreyra a Debarre, los sellos de la firma Corphone S.A. hallados en poder de Vieyra Ferreyra, los cheques de Vieyra Ferreyra secuestrados en el domicilio de Debarre, el descuento de cheques presuntamente originados en las ganancias obtenidas por la asociación ilícita por la comercialización de facturas apócrifas y las distintas interceptaciones de comunicaciones telefónicas obrantes en autos cuyo contenido da cuenta del trato directo cotidiano y cercano..."*, resultaban elementos de cargo contrarios al sobreseimiento dispuesto.



Precisaron que si bien la confección de la facturación apócrifa, con los montos y descripción de conceptos para el empleo en la contabilidad y liquidación impositiva de la contribuyente podían considerarse parte de la propia ejecución del ardid evasor de cualquier "cliente" de la asociación ilícita fiscal, también era cierto que el presunto descuento de cheques como retorno o maniobra de monetización de las ganancias de dicha organización excedía notoriamente la configuración del delito de evasión fiscal de dicha contribuyente (en este caso, Corphone S.A.), constituyendo un aporte esencial al mantenimiento y continuidad de la asociación ilícita presuntamente liderada por Diego Vieyra Ferreyra.

En dicha inteligencia, señalaron que sin perjuicio "de la licitud de la que pudiera gozar el aporte realizado mediante la operación de descuento de cheques con fondos propios, debe valorarse ese aporte en el contexto delictivo conocido por el imputado y su impacto en el delito en cuestión. Al respecto, no puede soslayarse que Debarre -conociendo el origen ilícito de esos fondos y la trascendencia de su aporte a la financiación de la asociación ilícita- habría proveído de liquidez y permitido la continuidad y funcionamiento de la asociación ilícita organizada por Diego Vieyra Ferreyra".

Asimismo, agregaron que "no cabe valorar genérica y aisladamente" el comportamiento de Debarre, sino en forma sistémica y global para determinar la existencia y carácter de la cooperación o contribución brindada a los miembros de la organización.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Seguidamente, consideraron que las consultas de Diego Vieyra Ferreyra a Cristian Debarre por el cambio de cheques fueron reiteradas y habituales, *"lo cual revela la necesidad de liquidez de la asociación sin la cual no podría haber seguido obteniendo ganancias por la venta de facturación apócrifa y la creación de sociedad ficticias"*.

En base a lo reseñado, concluyeron que *"si bien Corphone SA, mediante la intervención personal de Debarre, habría sido 'cliente' de la asociación ilícita, éste último a título personal habría sido financista de la asociación ilícita, permitiendo con su aporte la continuidad de la ejecución del plan asociativo de generación de facturación apócrifa para provisión de distintos contribuyentes"*.

Analizados los aspectos relevantes del caso, los argumentos expuestos en la decisión impugnada y las críticas del impugnante, he arribado a la conclusión de que la resolución en crisis debe ser convalidada.

A fin de efectuar un correcto análisis de la cuestión, es pertinente recordar que el auto de procesamiento es una decisión jurisdiccional en la que se analiza la prueba colectada conforme a las reglas de la sana crítica y se llega a la creencia, prescindente de certeza plena, de que se ha cometido un delito y de que la persona imputada está vinculada a su ejecución. Es un juicio afirmativo, que se sustenta en elementos que todavía no han sido confrontados, pero que son suficientes para habilitar el desarrollo pleno del proceso (Cfr. Navarro -



Daray, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t.2, Hammurabi, p.527 y ss.).

Lo característico de este estadio procesal consiste en que, a diferencia de la sentencia condenatoria dictada luego del juicio oral, en la que se requiere la acreditación de una certeza que supere toda duda razonable, aquí resulta suficiente que la imputación se sustente en un juicio de probabilidad positiva.

Es esta situación la que se presenta en el decisorio impugnado, en la medida en que los magistrados de la Cámara *a quo* han dado sólidas razones que dan cuenta de que los elementos reunidos en la instancia resultaban suficientes para el dictado del mencionado auto de mérito.

Estos argumentos, por lo demás, no han sido controvertidos por el impugnante, que nada ha dicho acerca del trato directo, cotidiano y cercano de Debarre con el organizador de la asociación ilícita, Diego Vieyra Ferreyra y, en especial, respecto a los sellos de la firma "Corphone S.A." hallados en poder de Vieyra Ferreira, situaciones que exceden a la alegada mera relación de cliente de la asociación ilícita.

En igual sentido, las críticas expuestas por la defensa no logran controvertir el análisis realizado por la Cámara, respecto a que el presunto descuento de cheques como retorno o maniobra de monetización de las ganancias de dicha organización excede notoriamente la configuración del delito de evasión fiscal de "Corphone S.A.", constituyendo un aporte al mantenimiento y continuidad de la asociación ilícita presuntamente liderada por Vieyra Ferreira.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Con mayor precisión, el *a quo* indicó que la conducta de Debarre no puede ser valorada aisladamente sino teniendo en cuenta el contexto delictivo conocido por el imputado y su impacto en el delito de asociación ilícita.

De este modo, existiendo un cúmulo de elementos suficientes como para sospechar que se podría estar en presencia de la comisión del delito de asociación ilícita fiscal, corresponde convalidar la decisión adoptada.

Todo lo expuesto me lleva a considerar que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada, que supera el estándar establecido en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación y que las críticas del impugnante solo consisten en una expresión de su disenso acerca de la valoración de la prueba y el encuadre jurídico de la conducta imputada a Cristian Debarre, pero sin demostrar la arbitrariedad o el error de las razones brindadas en la decisión impugnada.

Por estos motivos, propicio al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre, con costas en la instancia (arts. 530 y cctes. del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

F) Situación procesal de Jorge Daniel Cuevas

El 14 de agosto de 2023, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba confirmó -por mayoría- la decisión dictada el 9 de diciembre de 2021 por el juez a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que dispuso, en lo que aquí interesa, "26.- *SOBRESEER a Jorge Daniel Cuevas (arts. 335 y 336 inc. 3 del C.P.P.N.), en*



relación al delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1 del C.P.), en carácter de autor (art. 45 del C.P.)”.

Contra dicha decisión interpusieron recurso de casación los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera.

El representante de la UIF señaló que no existía certeza apodíctica que sustentara la desvinculación del proceso dispuesta, en tanto los elementos reunidos hasta el momento eran insuficientes para realizar el juicio de mérito, ya fuera sobre la presencia de responsabilidad o sobre la ausencia de ella.

Por otra parte, el fiscal general expuso que los magistrados realizaron conjeturas, dando por existente una relación entre los bienes declarados por el imputado con anterioridad a la investigación y la compra de aquellos bienes que integraban el objeto de esta causa, pero que tal presunción no se ajustaba a la realidad.

Especificó que en la resolución recurrida se evaluó que la esposa y el hijo del imputado *“serían quienes adquirieron los bienes, pero no se acreditó que ellos tengan una remuneración o ganancias suficientes para comprarlos”.*

Alegó que la instrucción no estaba completa y que debían tomarse medidas para reunir los elementos necesarios a fin de acreditar la participación o desvinculación de Cuevas en el hecho que se le atribuye.

A fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas, corresponde recordar que se le imputó a Jorge Daniel Cuevas, como hecho 99, el haber adquirido el 3 de mayo de 2019 un automóvil





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

BMW X4, año 2017, dominio AA892YK, por un valor que rondaría los \$2.500.000 y el 05 de mayo de 2020 un automóvil marca Mercedes Benz año 2019, dominio AD124TH, por un valor que rondaría los \$3.983.000. Asimismo, se le endilga haber tenido en su poder cheques por \$10.000, \$194.590 y U\$D 9.897, los que fueron secuestrados en el allanamiento de su domicilio.

En cuanto a la cuestión aquí examinada, el magistrado de primera instancia sostuvo que el informe de dominio del vehículo Mercedes Benz, dominio AD124TH, en coincidencia con lo señalado por Cuevas en su declaración indagatoria, da cuenta que el rodado es propiedad de su hijo Carlos Cuevas y de su cónyuge Andrea Santos de Medeiros, siendo que el imputado sólo se encuentra autorizado para su uso.

Por otra parte, refirió que a partir del perfil patrimonial de AFIP de Jorge Cuevas, del informe de dominio de la DNRPA y de los propios dichos del imputado, se encuentra acreditado que Cuevas *"adquirió en forma conjunta con su esposa Andrea Santos de Medeiros (50% cada uno), el automóvil BMW X4, año 2017, dominio AA892YK, en la fecha que informa el Fiscal"*.

Asimismo, indicó que del allanamiento realizado en el domicilio de Cuevas surge que se secuestraron tres cheques por \$10.000, \$194.590 y U\$D 9.897, circunstancia que también fue corroborada por el imputado en su indagatoria.

Seguidamente, ponderó que del perfil patrimonial de AFIP surge que Cuevas realizó un "blanqueo" de 296.200 dólares estadounidenses conforme la ley 27.260, en el período 2016, por lo que dichos bienes adquirieron carácter lícito. Además, valoró



que, de conformidad con lo señalado por el imputado, el informe mencionado también daba cuenta de que en el año 2013 (es decir, con fecha anterior a los hechos materia de investigación) Cuevas adquirió el vehículo BMW X1 dominio IYQ093, que fue vendido en el año 2019, en una fecha similar a la de la adquisición del vehículo presuntamente objeto de la maniobra de lavado de activos. Por último, agregó que Cuevas, en su declaración de Ganancias de Personas Humanas presentada en el mes de junio de 2020 (antes del inicio de esta causa), declaró más de un millón de pesos en distintos conceptos.

Posteriormente, en base a los bienes declarados y las actividades lícitas realizadas por Cuevas, consideró que el imputado tenía capacidad económica suficiente para adquirir todos los bienes que el Ministerio Público Fiscal le imputaba como objeto de la maniobra de lavado de activos.

Por último, afirmo que el fiscal se limitó a enumerar los bienes presuntamente adquiridos por Cuevas, sin explicar por qué ellos habrían sido adquiridos por las maniobras ilícitas investigadas en la causa y no con su patrimonio de origen lícito.

Por las razones reseñadas, resolvió dictar el sobreseimiento de Jorge Daniel Cuevas (arts. 335 y 336 inc. 3 del C.P.P.N.) en orden al delito de lavado de activos (hecho n° 99).

Dicha decisión fue impugnada por el representante del Ministerio Público Fiscal y el tribunal a quo confirmó el temperamento adoptado.

Para así resolver, los jueces que conformaron la mayoría, luego de valorar los elementos de prueba mencionados por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

el magistrado instructor, consideraron que agotada la investigación tendiente a determinar las maniobras imputadas a Cuevas, se acreditó *"la existencia en el patrimonio del encartado de capitales lícitos suficientes y su correlación económica-financiera con los bienes adquiridos"*.

En esa inteligencia, evaluaron que *"del perfil patrimonial de AFIP surge que el imputado Jorge Daniel Cuevas sinceró -conforme la Ley N° 27.260- USD 296.200 (dólares estadounidenses doscientos noventa y seis mil doscientos), en el período 2016. A su vez, se acreditó que adquirió el vehículo BMW X1 dominio IYQ093 en el año 2013 (es decir, previo a los hechos bajo investigación), el cual resultó vendido en el año 2019 en una fecha similar a la de la adquisición del otro vehículo sospechado de ser objeto de maniobras de lavado. A su vez, en su declaración de Ganancias de Personas Humanas presentadas en Junio del 2020 declaró más de un millón de pesos en distintos conceptos"*.

Por otra parte, advirtieron que *"la imputación no da cuenta, siquiera con una estimación aproximada, de qué montos de dinero ilícito habría gozado el imputado y que luego resultó mezclado con sus ingresos lícitos, en qué cuentas o bien algún elemento en particular que permita vislumbrar la trazabilidad del presunto dinero espurio"*.

Por último, indicaron que *"exigir la prueba de con qué dinero se adquirieron, por su carácter esencialmente fungible, implicaría la producción de la prueba 'diabólica', es decir, la*



prueba de la no utilización en este caso de dinero de procedencia lícita".

En virtud de ello, como ya se indicó, se confirmó la resolución adoptada por el juez instructor.

En primer lugar, corresponde señalar que los jueces que conformaron la mayoría, basaron la decisión desincriminante en el perfil patrimonial de Jorge Daniel Cuevas, por cuanto consideraron que a partir del sinceramiento que habría efectuado en el año 2016, el imputado contó con "*capitales lícitos suficientes*" para adquirir los bienes que el representante del Ministerio Público Fiscal le imputa como objeto de la maniobra de lavado de activos.

Al respecto, el fiscal en su recurso destacó que los jueces de la instancia anterior en base a conjeturas dieron por probada una relación entre los bienes declarados por el imputado con anterioridad a la investigación y la compra de los bienes individualizados en el requerimiento de instrucción.

Señaló la ausencia de documentación que respaldara el razonamiento expuesto en la resolución recurrida, en base al citado blanqueo de capital.

Seguidamente, cuestionó el argumento referido a que el rodado Mercedes Benz fue adquirido por el hijo y la esposa de Cuevas, por cuanto no se encontraba acreditado que contaran con una remuneración o ganancia suficiente para la adquisición del vehículo.

De esta manera, concluyó que no estaba completa la instrucción y que resultaba necesario ahondar la investigación a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

finde de reunir los elementos necesarios para establecer la participación o la desvinculación de Cuevas en el hecho que se le atribuía.

Confrontadas las particulares y concretas circunstancias del caso, considero que los elementos de prueba citados y analizados por los jueces de la instancia anterior no otorgan sustento suficiente a la resolución adoptada.

En dicho sentido, cabe destacar que el sinceramiento de bienes que habría efectuado Cuevas en el año 2016 (conforme Ley 27.260), que fue ponderado tanto por el juez instructor como por los magistrados de la instancia anterior por un valor de doscientos noventa y seis mil doscientos dólares, no encuentra respaldo en la constancia obrante en la pestaña de documentación digital del Sistema Lex 100 (documento agregado el 3/2/2021).

En efecto, la lectura del documento aludido revela que Jorge Daniel Cuevas habría declarado la suma de veinte mil dólares estadounidenses, que cotizados a catorce pesos con ochenta y un centavos, determina que el sinceramiento se limitó a la suma de doscientos noventa y seis mil doscientos pesos.

La circunstancia mencionada evidencia un quiebre del iter lógico plasmado en la decisión puesta en crisis, que, en definitiva, deja sin sustento suficiente a la resolución impugnada.

En esa inteligencia, se advierte que en el presente caso, el razonamiento plasmado en la resolución recurrida carece de sustento probatorio suficiente para concluir que se ha



configurado alguna de las causales previstas en el artículo 336 del código de forma.

Conforme a lo expuesto y sin abrir juicio sobre el valor probatorio que posteriormente pueda darse a los elementos de prueba aportados al proceso, corresponde señalar que el fallo impugnado no se encuentra precedido de fundamentos válidos que respalden la resolución desvinculatoria adoptada.

Por ello, en definitiva, propicio al Acuerdo hacer lugar en este punto a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera, anular el punto dispositivo XXI de la resolución recurrida, en cuanto confirmó el sobreseimiento de Jorge Daniel Cuevas respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 99- y reenviar la causa al *a quo* a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Sin costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

IV. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo:

I. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto cuestionó el punto dispositivo IX de la resolución recurrida, sin costas (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

II. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar el punto dispositivo VI de la resolución recurrida y su antecedente necesario y disponer que el Juzgado Federal de Córdoba n° 1 continúe conociendo en la investigación de los delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos nominados 95





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102- (arts. 470 y 471 del C.P.P.N.).

III. Rechazar los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera contra el punto dispositivo XIX de la resolución recurrida, sin costas.

IV. Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la querellante AFIP-DGI contra el punto dispositivo X, revocar el sobreseimiento de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas -hechos nominados 75 y 76 del requerimiento de instrucción- y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que continúe la causa según su estado, sin costas (arts. 470, 471, 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

V. Rechazar los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la querellante Unidad de Información Financiera contra los puntos dispositivos XII, XIII, XIV, XV y XVII, sin costas.

VI. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra el punto dispositivo XVI,



revocar la suspensión de las acciones penales con relación a Leuterio Carlos Bonetto por los hechos 86 y 113 de los requerimientos de instrucción y remitir la causa a la instancia de origen para que continúe según su estado, sin costas.

VII. Rechazar los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la querellante Unidad de Información Financiera contra el punto dispositivo XX, sin costas.

VIII. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre, con costas (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

IX. Hacer lugar a los recursos de casación del Ministerio Público Fiscal y de la querellante Unidad de Información Financiera contra el punto dispositivo XXI, revocar el sobreseimiento de Jorge Daniel Cuevas por el hecho nominado 99 y remitir las actuaciones a la instancia de procedencia para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (arts. 470 y 471 del C.P.P.N.).

X. Tener presentes las reservas del caso federal efectuadas.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. En primer término, y en cuanto a la procedencia del recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre en los términos de lo dispuesto en el artículo 457 del C.P.P.N., cabe recordar que ya he sostenido que procede la revisión casatoria del auto de procesamiento -cuando éste revoca el sobreseimiento o la falta de mérito dictado por el magistrado





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

instructor- dispuesto por la Cámara de Apelaciones (cfr.: causas "Sorrentini, Franco s/recurso de queja" -causa Nro. 10.054, Reg. Nro. 12.400, rta. el 30 de septiembre de 2009-; y "Mellián Añón, Eduardo José s/ recurso de casación" -causa Nro. 10.436, Reg. Nro. 13.005, rto. el 26 de febrero de 2010-; entre varios otros).

Consideré que la garantía del "derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior" contenida en el artículo 8.2.h. de la C.A.D.H., debe hacerse efectiva también cuando el auto de procesamiento es dictado por la Cámara de Apelaciones concluyendo que es susceptible de ser revisado por esta instancia.

Y que, entonces, con el fin de garantizar al imputado el legítimo ejercicio del derecho al recurso, y teniendo en consideración que nuestro sistema de enjuiciamiento penal no prevé otro medio de impugnación que el recurso de casación para la revisión de resoluciones como la aquí recurrida, a la luz de la jurisprudencia reseñada en los citados precedentes, y de la manda constitucional de los artículos 31, 33 y 75 inc. 22, debe considerarse, en principio, formalmente cumplido el requisito de procedibilidad dispuesto por el artículo 457 del C.P.P.N.

A su vez, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de las querellantes Unidad de Información Financiera y AFIP-DGI resultan formalmente admisibles, toda vez que los puntos decisorios recurridos son definitivos o equiparables a tales (art. 457 del C.P.P.N.), las partes se encuentran habilitadas para impugnarlos (arts. 458 y 460 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456



del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.

Sin perjuicio de lo expuesto, advierto, al igual que el colega que lidera el orden de votación que el punto dispositivo IX de la resolución recurrida cuestionado por el representante del Ministerio Público Fiscal, no forma parte de las decisiones especialmente previstas por la ley como recurribles en la presente instancia ya que no supera el límite de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N. por no tratarse de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena (cfr. Sala IV: Causa Nro. 13.354 "MONTELLANOS, Aniceto Bernabé s/ recurso de queja", resuelta el 29/03/12, Reg. Nro. 420/12; Causa Nro. 13.311 "OTERO, Emilio José s/ recurso de queja", resuelta el 29/03/12, Reg. Nro. 421/12; Causa Nro. 13.848 "MENDOZA VIDAL, Cristino y otros s/ recurso de queja", resuelta el 17/05/12, Reg. Nro. 773/12; Causa Nro. 13.858 "HOLGADO, Alejandra Marcela s/ recurso de queja", resuelta el 17/05/12, Reg. Nro. 776/12; Causa Nro. 14.008 "BAKCHELLIAN, Fabián Eduardo y otra s/ recurso de queja", resuelta el 27/06/12, Reg. Nro. 1097/12; Causa 1456/2013 "CERATTI, Adrián Ernesto s/recuro de queja, resuelta el 20/2/14, Reg. Nro. 156.14.4; causa CFP 10580/2012/13/RH1 "MEDINA, Carlos Alberto s/recurso de queja", resuelta el 18/2/15, Reg. Nro. 62/15; causa FLP 55007467/2013/2/RH1 "LÓPEZ RIVAS, Darío César s/recurso de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

queja", resuelta el 15/4/16, Reg. Nro. 418/16; FSM 34003468/2013/17/RH2 "CARO, Rodrigo s/recurso de queja", resuelta el 28/9/17, Reg. Nro. 1322/17.4).

Por lo demás, el recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el colegiado de la instancia anterior, que permita equipararla a definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara (Fallos 318:514 y 328:1108). En tal orden, no se encuentra debidamente fundada la arbitrariedad del decisorio teniendo en cuenta el estadio procesal por el que transitan las presentes actuaciones.

II. Previo a ingresar al análisis de los concretos planteos efectuados por los recurrentes, **corresponde describir someramente la hipótesis delictiva objeto de pesquisa en el caso.**

En la presente causa se investiga una organización de gran magnitud en la que fueron procesadas más de 30 personas por diversas maniobras delictivas como asociación ilícita fiscal, alteración dolosa de registros, evasión de impuestos agravada, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos.

El expediente tuvo su génesis en la denuncia formulada por Nahuel Ezequiel Mamóndez efectuada como consecuencia de haber tomado conocimiento de la existencia de numerosas facturas realizadas con su CUIT que no habían sido realizadas por él.

Paralelamente, se inició una investigación a raíz de una denuncia penal realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por la que se puso en conocimiento de



la justicia que se habían detectado maniobras de presunto fraude fiscal.

Así, se habría detectado una organización criminal conformada para la realización de ilícitos fiscales, a través de la emisión y venta de facturas manuales o electrónicas apócrifas a su nombre, a nombre de otras personas físicas -con o sin su consentimiento-, o de personas jurídicas integradas por cualquiera de ellos, utilizando sus claves fiscales y sin tener la capacidad económica en general para proveer servicios y/o productos -usinas- o en particular los servicios y/o productos facturados -usinas mixtas-.

La maniobra también involucra la copia de facturas verdaderas de contribuyentes con capacidad económica a las cuales se les cambiarían los datos del cliente y los valores de la operación, en realidad inexistente.

Todo ello con la finalidad de generar crédito fiscal ilícito y/o gastos ficticios, para disminuir la base imponible de los clientes de la organización con relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, y para disimular la falta de capacidad económica de las propias "usinas" y "usinas mixtas" utilizadas para emitir facturas apócrifas, con excepción de los Municipios y Comunas - exentos de dichos impuestos - que aparecen entre los destinatarios de tales facturas.

Por otra parte, frente a la existencia de activos de gran envergadura generados por la comisión de ilícitos fiscales, también se investigó la legitimación de bienes de origen ilícito y posibles maniobras de lavado de activos. Fue de tal modo que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

varias de las personas imputadas por asociación ilícita fiscal, evasión impositiva, alteración dolosa de registros, entre otros, fueron imputadas y procesadas por el delito de lavado de activos (art. 303, inc. 1 del C.P.).

Así, a grandes rasgos, lo que se investiga en esta causa es la conformación de una asociación destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la comisión de un número indeterminado de ilícitos tributarios, integrada presuntamente por Diego Alberto Vieyra Ferreyra como organizador, Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, María Belén Gómez, Damián Gabriel Olivieri Brizuela, Jorge Daniel Cuevas, Ruth Noemi Diaz, Eduardo Enrique Mansilla, Mauricio Andrés Pizzi, Pablo Darío Barbieri, Rodolfo Luis Tapiero, Lucas Fernando Zopetto, Cristian Debarre, Sebastián Toranzo, entre otros, y algunos delitos cometidos por esta banda.

A los miembros de la asociación se les imputó el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. "c" de la ley 27.430) y alteración dolosa de registros fiscales (art. 11 inc. "b" de la mencionada ley) agravado por el concurso de dos o más personas. Los clientes que adquirirían las facturas apócrifas fueron imputados por la evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas de esa naturaleza y por el concurso de dos o más personas (art. 2 inc. "d" y 15 inc. "b" del Título IX- Régimen Penal Tributario-de la ley 27.430). Además, las autoridades de Corphone S.A. y Softkey S.A. fueron imputadas también por el delito de defraudación por administración fraudulenta (arts. 172 y 173 inc. 7°, CP). En el caso de los funcionarios de la municipalidad y comunas involucrados en las maniobras, se les



imputó el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5°, CP). Por último, varias de las personas ya mencionadas fueron imputadas por el delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1°, CP).

III. En primer término, cabe señalar respecto al planteo expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal por el que cuestionó la decisión del "a quo" de confirmar la incompetencia material de la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los hechos nominados 95 y 96, que el objeto de la presente pesquisa está constituido por hechos complejos que deben ser analizados dentro de un único contexto. La estrecha vinculación entre los delitos investigados imposibilita su estudio por separado.

Lo expuesto no resulta antojadizo sino que es consecuencia de la misma interpretación que quienes han intervenido en el proceso le ha dado hasta el momento a los hechos investigados en autos.

En efecto, del análisis que corresponde en el caso no puede soslayarse que en el año 2019 se denunció la existencia de una usina de facturas apócrifas y que luego de una importante investigación llevada adelante por la AFIP y distintas fuerzas de seguridad, se promovió acción penal contra un grupo de personas que en principio conformaron una asociación ilícita que habrían generado miles de facturas falsas, que, una vez emitidas, habrían sido presentadas a fin de evitar el pago de diferentes tributos. Es en ese contexto en el que se habrían evadido millones de pesos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

por parte de personas físicas y jurídicas, facilitando así maniobras de administración fraudulenta por parte de diferentes empresas y organismos públicos.

En efecto, como surge en autos, las facturas apócrifas que habrían sido emitidas por la asociación ilícita fiscal investigada habrían sido justamente las que facilitaron las maniobras de administración fraudulenta descriptas en los hechos que pretenden ser remitidos a la justicia ordinaria.

Todo forma parte de un mismo contexto delictivo que debe ser investigado de manera conjunta, dado que las defraudaciones no podrían haber sido realizadas sin la conducta delictiva previa de la asociación ilícita. Tal es así que incluso el presunto jefe de esta organización Diego Vieyra también fue imputado como partícipe necesario de las administraciones fraudulentas en cuestión.

De tal forma, la declinatoria de competencia efectuada por el juzgado federal basada en la calidad de los sujetos pasivos de los delitos de defraudación -sociedades comerciales y entes estatales de la provincia de Córdoba- resulta al menos prematura, y la resolución recurrida -en cuanto confirma la declinatoria de la competencia- no luce adecuadamente fundada, debiendo quedar a cargo de la investigación la justicia de excepción.

Al encontrarse en la justicia federal la dilucidación de los hechos que constituyeron la matriz inicial de las posteriores maniobras delictivas desplegadas por los encartados, ésta se encuentra en mejor posición y disposición para realizar



todas las pesquisas que sean necesarias a los fines del esclarecimiento de los hechos investigados en autos. Considero que la estrecha vinculación existente entre los delitos investigados representa un extremo determinante que aconseja que la investigación esté a cargo de un único tribunal a fin de garantizar una adecuada administración de justicia

En este orden de ideas, si el acusador público reclama la continuación de la presente causa en el fuero de excepción, mediante argumentos fundados y, en principio, razonables, efectuando un juicio provisional acerca de los hechos y el derecho aplicable que intenta acreditar y considerando que el caso *prima facie* estaría configurado por hechos complejos que formarían parte de un único contexto delictivo, debe estarse a esta hipótesis imputativa, la cual servirá de marco para trabar el contradictorio y así conformar el *thema decidendum* sobre el cual versará un futuro -e hipotético- juicio oral y público.

Es que, en base a las pautas hasta aquí mencionadas, con relación a la materia discutida en esta oportunidad, ha logrado demostrar el recurrente que la valoración de los elementos y constancias de la causa efectuada por el *a quo* para confirmar la incompetencia de la justicia federal, se presenta arbitraria y carente de fundamentación.

En efecto, de las constancias de la causa surgen elementos que *a priori* permiten acompañar la hipótesis acusatoria y, teniendo especialmente en cuenta el estadio procesal de la causa, la declinación del fuero federal resulta, como se adelantó, prematura e inconveniente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Bajo este prisma es que deberá analizarse el caso de autos y, reitero, la plataforma fáctica sobre la cual se realizará el juicio de subsunción legal, quedará delineada en toda su extensión durante el -hipotético- debate oral y público, espacio en el cual los extremos aquí señalados podrán ser corroborados o descartados.

Así, estudiados las constancias obrantes en el presente proceso y las específicas circunstancias y argumentos desarrollados por el ahora recurrente en la presente causa y en la impugnación interpuesta ante esta instancia, desde una inspección seria, integral y contextualizada (cfr. en lo pertinente mis votos en causas "DORES, Oscar Emilio s/recurso de casación" reg. 601/24; rta. el 3/06/2024) cabe concluir que la competencia para la investigación del hecho denunciado, corresponde al fuero federal.

IV. Sentado cuanto precede, corresponde ingresar a los agravios de las partes interpuestos contra los puntos X al XVII en los que se dispuso la confirmación del sobreseimiento por extinción de la acción penal respecto de los hechos 75 y 76, calificados como evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas, por aplicación de la ley 27.541; y la confirmación de la suspensión de la acción penal respecto de los hechos 77, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 90, calificados como evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas, por aplicación de la ley 27.541.



De los antecedentes necesarios analizados en autos, se advierte que la decisión adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, se presenta -en relación con los elementos y constancias obrantes en la causa- al menos prematura.

En efecto, los impugnantes han expuesto fundadamente que, en el estado actual en el que se encuentra la causa, no es posible el dictado de una solución como la adoptada, describiendo que en la resolución no se ha efectuado adecuado estudio que abarque la completa dimensión de los elementos obrantes en autos. Es que no se advierte, por lo menos a esta altura del proceso y teniendo en consideración una amplia visión del contexto global de la maniobra investigada, que las circunstancias estipuladas en la ley 27.541 sean aplicables al caso.

Cabe recordar que, como se desprende de los requerimientos de instrucción, las evasiones aquí investigadas están estrechamente vinculadas con la existencia de la asociación ilícita fiscal que proveía a muchísimos contribuyentes con las facturas apócrifas utilizadas para eludir el pago de las deudas tributarias -tributos nacionales- que les eran exigibles.

El delito de asociación ilícita fiscal requiere la existencia de un acuerdo de voluntades, estable y con caracteres de cohesión y organización, entre tres o más personas imputables con la finalidad de cometer delitos en forma general e indeterminada, aun cuando se refieran a una misma modalidad delictiva, en el caso, de delitos tipificados en la ley penal tributaria.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

De manera que el tipo penal en estudio (al igual que aquél previsto en el artículo 210 del Código Penal) no requiere la acreditación de la comisión de los concretos delitos de ese carácter, que, en su caso, resultarán hechos delictivos distintos y ajenos a la figura típica de que se trata.

Sin embargo, resulta innegable que este último dato, puede resultar sustancial -sumado a la prueba de los restantes requisitos- como demostrativo de la existencia misma de la asociación ilícita. Ello, pues aun cuando su configuración no requiera de la existencia de otros delitos consumados y ni siquiera del principio de ejecución de éstos, es necesario distinguir, más allá de la forma en que concurren dichos delitos con el de asociación ilícita, la cuestión relativa a los efectos que puede irrogar en el caso la extinción/suspensión de la acción penal y el sobreseimiento dictado -respecto a los hechos que conformaron aquellos delitos concretos-, esto es: la imposibilidad de que, por imperio del principio de "ne bis in idem", pueda volverse sobre aquéllas concretas conductas que ya no conforman la materialidad fáctica objeto de imputación, con la lógica consecuencia de que entonces quede trunca la posibilidad de probar la configuración del delito de asociación ilícita (cfr. mi voto en causas "SOMMA, José y otros s/recurso de casación" reg. 7995.4, rta el 27/10/06 y "BERDICHEVSKY, Claudia y otros s/rec. de casación", reg. N°1194/22, rta. el 5/9/22; entre otros).

Máxime cuando se trata -como en el caso- también de la imputación de maniobras delictivas que habrían sido ya concretamente realizadas y que podrían resultar sustanciales -



aunque no suficientes- a los fines de acreditar la finalidad de ejecutar una pluralidad de planes delictivos por parte del grupo de personas encausadas.

Lo expuesto, pues, conforme lo establecen los artículos 336 y 337 del C.P.P.N., no resulta procedente el dictado del sobreseimiento en relación a una figura delictiva, o denominación jurídica del ilícito penal, sino respecto del hecho o de una realidad histórica. Y en el caso, esa plataforma fáctica contenida en la imputación, y a las personas sometidas al proceso (cfr. Clariá Olmedo: "Derecho Procesal Penal", T. IV, pág. 309), quedará así sustraída del objeto procesal en orden al sobreseimiento que se impugna.

A lo que debe adunarse que la garantía que prohíbe la doble persecución penal por el mismo hecho, tiene como fundamento el de proteger a los ciudadanos de las molestias y restricciones que implicaría toda nueva "persecución penal" o la continuidad del mismo proceso en orden al mismo objeto procesal, aun cuando abarcado por una materialidad fáctica más extensa, a pesar de que ese proceso penal -u otro-, ya se había agotado a ese respecto; sin que se tenga en cuenta para ello su calificación legal (cfr. C.S.J.N. Fallos: 299:221; 308:1678; 258:220; 292:202; 314:377; 315:2680 y 321:1848).

Es que, "se trata de impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento históricamente determinado se repita, cualquiera que sea el significado jurídico que se le haya otorgado en una u otra ocasión. Se mira el hecho como acontecimiento real, que sucede en un lugar y en un momento





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

o período determinados, sin que la posibilidad de subsunción en distintos conceptos jurídicos afecte la regla, permitiendo una nueva persecución penal, bajo una valoración distinta de la anterior" (cfr: Maier, Julio B.: "Derecho procesal Penal", Editores del Puerto, Bs. As. 1999.2ª edición, 1ª reimpresión, pág. 606/7).

Lo expuesto permite concluir la sustancialidad del planteo efectuado por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto ha destacado que estamos ante un caso de mega evasión tributaria articulada mediante maniobras complejas y de difícil detección para el organismo recaudador, y que, en este caso, la afectación al bien jurídico protegido -erario público-, entendida dentro de la compleja maniobra global, es mucho más intensa de lo que podría ser un mero caso de evasión simple.

Así, teniendo en cuenta las particularidades del caso que involucran evasiones millonarias, la existencia de una organización para la producción de facturas apócrifas, posteriores conductas de "blanqueo", entre otras, las evasiones imputadas no pueden escindirse de la maniobra global, por lo que, de momento, resulta prematuro que sean amparadas dentro de lo estipulado en ley 27.541.

En ese marco resulta imperioso y necesario el desarrollo de una investigación profusa que incorpore y no deje afuera ninguna de todas las aristas que integran la compleja maniobra criminal. Ello permitirá que la instancia oral cuente con un producto mucho más elaborado que permitirá dilucidar la



realidad de los hechos y la verdadera responsabilidad de todos los imputados en ellos.

Por ello corresponde revocar la resolución en cuanto dispuso la suspensión/extinción de la acción penal (según el caso) respecto de los hechos 75,76,77,78,80,81,82,85,86,90, calificados como evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas.

V. Luego de evaluar los antecedentes necesarios para comprender la discusión sometida a esta instancia, cabe concluir que el marco dogmático expuesto en el recurso de casación deducido por las partes recurrentes resulta también razonablemente fundado en sus cuestionamientos a los sobreseimientos dictados en autos por los hechos 104 y 105 -punto XIX- y a la suspensión de la acción penal de los hechos 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113 -punto XX- que habían sido calificados oportunamente como lavado de activos de origen ilícito (art. 303 del C.P.).

En primer término, el caso traído a estudio debe ser analizado y valorado desde una mirada que se compromete con los derechos que el caso involucra, tomando en cuenta principalmente los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de lavado de activos.

En efecto, ya he sostenido que en los casos en los que se investigan y juzgan maniobras relacionadas con el lavado de activos, se requiere de investigaciones intensas por la calidad del delito en cuestión, debiendo la justicia garantizar el debido desarrollo del proceso penal (cfr. mi voto en causa "CHAVEZ,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Ramón Alejandro y otro/recurso de casación" de esta Sala IV, reg. 2036.19, rta. el 10/10/2019, y causa CFP 14619/2007/TO3/4/CFC15 "TEGLI, Lorena Verónica s/recurso de casación", Reg. 764/2022, rta. el 14 de junio de 2022, "DORES, Oscar Emilio" ya citada, y causa "TAPIA, Claudio Fabian" reg. 642.4; rta. el 11/06/2024, entre varias otras).

Se trata de un delito en cuya esencia se encuentra la contingencia de la existencia de fondos por fuera del sistema financiero, circunstancia que se erige también como un factor objetivo sujeto a consideración.

En ese sentido no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado. En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos en forma oportuna y eficaz es fundamental (cfr. en lo pertinente causa "ZACARÍAS, Jorge Roberto"; reg. 2004.20, rta. el 9/10/2020, entre otras).

Es por ello mismo que nuestro Estado se ha comprometido a la lucha contra el lavado de dinero, al haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo, y que, también en cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ha adherido a las



cuarenta recomendaciones del "Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux" (GAFI)".

De tal forma se presenta sustancial garantizar la efectividad del debilitamiento de esta amenaza consolidando, en lo pertinente al caso que nos ocupa, los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, el lavado del producto del delito; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país con la comunidad internacional.

Se trata de mantener una estrategia eficaz que permita ordenar el esfuerzo estatal en esta materia. Lo que, como se adelantó, torna necesario en la etapa que nos ocupa: **la de investigación judicial, juzgamiento y represión del delito de lavado de activos, la interpretación normativa que implique un mayor aseguramiento de la implementación de procesos judiciales que resulten eficaces a ese fin** (cfr. en lo pertinente mi voto causa CIS María Julia reg. 1128.22.4 rta. el 29 de agosto de 2022, y causas "DORES, Oscar Emilio" y "TAPIA, Claudio Fabián" ya citadas)

Así, debe considerarse que el objeto de la pesquisa está constituido por hechos complejos que deben ser analizados dentro de un único contexto sin que pueda, a esta altura del proceso, descartarse la configuración del delito de lavado de activos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

En ese orden, se advierte que para descartar la imputación de lavado de activos efectuada por el Ministerio Público Fiscal, anclada en bienes y activos que habrían ingresado al patrimonio de los encartados, se ha apelado a circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la instrucción y su razonamiento no ha abordado suficientemente todas las aristas que presenta la compleja maniobra investigada en autos.

En efecto, para resolver del modo señalado, el "a quo" tuvo en cuenta que las acciones penales de los delitos precedentes -las evasiones tributarias- habían sido amnistiadas, por distintos motivos. En el caso de los hechos de lavado N°104 y 105, los imputados fueron sobreseídos por el hecho precedente -hecho N° 87- en tanto la evasión imputada no alcanzaba los nuevos montos establecidos como condición objetiva de punibilidad por el Régimen Penal Tributario (ley 27.430). Y en el caso de los hechos de lavado N° 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113, las acciones penales por los delitos tributarios fueron sometidas a los beneficios establecidos en el art. 10 de la ley 27.541, esto es la suspensión y/o extinción de la acción penal.

En concreto el "a quo" sostuvo que "...habiéndose amnistiado los delitos de evasión tributaria del cual provendrían los fondos ilícitos, el objeto de lavado -dinero de ahorro fiscal- resulta ahora jurídicamente aceptable o si se quiere "descontaminado", motivo por el cual los sobreseimientos decididos respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito deben ser confirmados pues han sido dictados conforme a derecho". A lo expuesto se aunó que "al desaparecer el carácter



delictivo -en el ilícito amnistiado- no puede ser luego considerado "ilícito precedente" del delito de lavado de activos sin contravenir los principios de legalidad y mínima suficiencia que inspiran nuestro Estado de derecho".

Ahora bien, cabe enfatizar que el "Lavado de activos" es el proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.

En este punto, me permito citar aquella publicación de casi treinta años atrás, en la que de manera primaria me referí al tema, esquematizando el fenómeno del proceso de lavado de dinero en tres fases diferentes: colocación, estratificación e integración (cfr. Hornos, Gustavo M., "Ley de Estupefacientes, Inversión, Venta, Transferencia o Cesión de las ganancias provenientes de su tráfico ilícito. Reserva Bancaria y Tributaria. Experiencia Judicial", en "III Jornadas Internacionales sobre Prevención del Fraude", Ed. La Ley, 1996, pág. 103).

La primera etapa consiste en depositar el activo en una institución financiera o mezclarlo con el producido por una empresa. Generalmente, se depositan montos en entidades financieras a través de una documentación falsa o de empresas de fachada.

La segunda etapa es un proceso de transferencias electrónicas entre cuentas y bancos, realizando el mayor número de transacciones posibles para dificultar el conocimiento del origen real.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

La última etapa, de integración, es la que proporciona la explicación lógica de la riqueza: se incorpora al dinero formalmente en el circuito económico, aparentando ser de origen legal (venta de propiedades, explotación de empresas, industrias, etc.).

En orden a ello, considero que la hipótesis imputativa, ya reconocida en esta instancia en una anterior intervención (cfr. reg. 52/2023, rta. el 14/2/2023), sigue vigente toda vez que no se ha corroborado fehacientemente que los activos en cuestión hayan sido integrados al patrimonio de los encausados a partir de fuentes legales, resultando prematuro concluir lo contrario sin tener en cuenta ampliamente las particularidades de la maniobra investigada, y lo complejo de la estructura del tipo penal en trato.

En primer lugar, para determinar qué sucede con el delito de lavado una vez que el delito previo ha sido amnistiado, es importante tener en cuenta que el primero es independiente del segundo, sin que sea necesaria una sentencia condenatoria al respecto. Por lo tanto, el dictado de un sobreseimiento o una sentencia absolutoria en relación con el delito anterior no impide considerar al acusado responsable por la conducta de "blanqueo" posterior. En este sentido, lo que ocurra con el delito previo no afecta al delito subsiguiente.

Es más, la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo sólo requiere la comprobación genérica de una actividad delictiva previa que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que



sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo específico; más aún si se considera que el presente proceso se encuentra en su instancia preliminar.

El Tribunal encargado de evaluar el caso de lavado de dinero deberá determinar, a partir de las pruebas presentadas durante el proceso, si hubo alguna actividad ilegal previa que originó los activos en cuestión. Sin embargo, no es necesario que lo haga con la misma minuciosidad y detalle que sería requerida en un juicio específico sobre ese hecho en particular. Es suficiente demostrar las circunstancias que claramente sugieran la comisión de una actividad ilegal, la cual puede permanecer relativamente indeterminada en sus especificidades.

Teniendo ello en cuenta, y al ser necesaria solo una comprobación genérica de la actividad delictiva previa, teniendo particularmente en cuenta la incipiente instancia en la que se encuentra el proceso, el tipo penal en estudio no requiere que el hecho anterior del cual provienen los bienes haya sido un hecho culpable y punible, sino que basta la demostración de su carácter típico y antijurídico.

En el caso en estudio se advierte que, como bien destaca el representante del Ministerio Público Fiscal, al momento en que se cometió el lavado, el dinero habría provenido de conductas ilícitas -destacándose el tipo penal de evasión de tributos-. Tal ha sido el enmarque que le ha dado tanto la acusación pública como particular al caso.

De esa forma, el posterior sobreseimiento de las evasiones por aplicación retroactiva de los nuevos montos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

establecidos en la ley 27.430 no contraviene lo expuesto, ya que, si bien la norma elevó la condición objetiva de punibilidad de la evasión, no eliminó la figura del ordenamiento penal, la que en la actualidad sigue plenamente vigente.

Lo mismo sucede con las evasiones cuya acción penal fuere en su caso suspendida/extinguida en virtud de los planes de pago suscriptos por los contribuyentes, toda vez que, en estos casos, la cancelación de la deuda tributaria no subsanaría la ilicitud de las evasiones. El pago no convierte la conducta en lícita, sino que simplemente desplaza su punibilidad (art. 10, ley 27.541).

Por todo ello, estimo pertinente que se examine con mayor profundidad el origen de los bienes en cuestión a partir de medidas de prueba concretas que permitan trazar una relación circunstanciada entre todos los activos apuntados y su origen, los que tampoco parecieran, de momento, surgir de otros capitales lícitos. Todo ello, teniendo en consideración el máximo esfuerzo que se le requiere a la justicia para una completa investigación del delito en trato (cfr. causas "DORES, Oscar Emilio" y "TAPIA, Claudio Fabián" ya citadas).

Siguiendo esa línea, entiendo, al igual que el colega que me precede en orden de votación, que también corresponde hacer lugar al recurso de casación del Ministerio Público Fiscal y la UIF por los que cuestionaron el sobreseimiento de Cuevas respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 99.



Es que, si bien el instructor y el "a quo" han mencionado la capacidad económica del encausado a los fines de desechar la imputación por lavado de activos, a la luz de las constancias de la causa, lo argumentado no se presenta como suficiente. En efecto, se observa que en el resolutorio recurrido se justifica el hecho investigado en función del patrimonio del encausado, pero tal tarea ha sido realizada sin fundar de manera circunstanciada tal relación a fin de descartar que los activos en cuestión sean producto de un rédito económico indebido.

En definitiva, estos serán los parámetros que deberán guiar el análisis del caso presente a fin de determinar la hipótesis imputativa y a cuyo amparo deberá profundizarse la pesquisa. Y son los que mejor se adecuan a la preocupación central de los legisladores al sancionar el delito en estudio.

Es que, en base a las pautas hasta aquí mencionadas, con relación a la materia discutida en esta oportunidad, han logrado demostrar los recurrentes que la valoración de los elementos y constancias de la causa efectuada tanto por el instructor como por el "a quo" para confirmar la disposición cuestionada, se presenta arbitraria y carente de fundamentación.

En efecto, de las constancias de la causa surgen elementos que "a priori" permiten acompañar la hipótesis de la querella y, teniendo especialmente en cuenta el estadio procesal de la causa, el dictado de los respectivos sobreseimientos y suspensión de la acción penal en los hechos reseñados, resulta, como se adelantó, prematura e inconveniente. Recordemos que el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

investigado se trata de un delito complejo que requiere de investigaciones intensas.

Así, estudiadas las constancias obrantes en el presente proceso y las específicas circunstancias y argumentos desarrollados por acusadores públicos y particulares en la presente causa y en la impugnación interpuesta ante esta instancia, corresponde a la instrucción adoptar las medidas que estime conducentes a fin de agotar la investigación.

Por ello, corresponde revocar la resolución recurrida, en cuanto dispuso el sobreseimiento de los encausados por los hechos 99, (punto XXI), 104 y 105 (punto XIX) y la suspensión de la acción penal por los hechos 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113 (punto XX), todos los cuales habían sido calificados como lavado de activos de origen ilícito (art. 303, inc. 1 del C.P.), debiéndose profundizar la investigación de conformidad a lo expuesto en el presente voto.

VI. Por lo demás, habré de adherir al colega que lidera el orden de votación en cuanto corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre contra el punto IX de la resolución impugnada que revocó el sobreseimiento del referido imputado y dispuso su procesamiento en orden al delito de asociación ilícita fiscal, en carácter de partícipe necesario.

En efecto, se advierte que el "a quo" ha efectuado un razonable análisis de las normas aplicables al caso y las pruebas incorporadas al expediente, de las que se destaca el trato fluido que habría mantenido Debarre con el líder de la organización



investigada, y las operaciones de descuento de cheques -un aporte sustancial al mantenimiento y continuidad de la asociación ilícita-, entre otras circunstancias válidamente consideradas, conforme el grado de certeza requerido para el dictado del procesamiento del imputado por el delito de asociación ilícita fiscal en carácter de partícipe necesario.

Finalmente, respecto a la situación de libertad de Diego Alberto Vieyra Ferreyra, también habré de remitirme a lo resuelto por esta Sala IV en la causa FCB 1392/2020/110/CFC4, "VIEYRA FERREYRA, Diego Alberto s/recurso de casación", Reg. N° 436/24, del 3/5/2024.

VII. En virtud de lo expuesto, propongo al Acuerdo:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto cuestionó el punto dispositivo IX de la resolución recurrida; sin costas en la instancia (art. 530 y 531 "in fine" del C.P.P.N.).

II. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y en consecuencia **revocar el punto dispositivo VI** de la resolución recurrida y su antecedente necesario y disponer que el Juzgado Federal n° 1 de Córdoba continúe conociendo en la investigación de los delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

III. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra los puntos dispositivo XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente necesario, en cuanto dispuso la suspensión de la acción penal con relación a Leuterio Carlos Bonetto en orden al hecho nominado 86 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Eduardo Mauricio Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento en orden a los hechos nominados 77 y 78 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Jonathan Nahuel Suarez Cavalieri en orden al hecho nominado 80 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a César Eduardo Cappella, Óscar Luque y Fernando Sciarra Villalba en orden a los hechos nominados 81 y 82 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Patricio Rolando González en orden al hecho nominado 85 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Walter Ariel Ghione y Andrés Pollano en orden al hecho nominado 90 del requerimiento de instrucción; todas presuntamente configurativos del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541); y en consecuencia **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.



IV. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la querellante AFIP-DGI contra el punto dispositivo X, y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente directo en cuanto dispuso el sobreseimiento de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas -hechos nominados 75 y 76 del requerimiento de instrucción- y **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

V. HACER LUGAR a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera contra de los puntos dispositivos XIX y XXI y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente necesario en cuanto dispuso el sobreseimiento de Mario Morselli y Augusto Boero en orden al delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 104 y 105, respectivamente (conf. art. 303 inc. 1 del CP) y de Jorge Daniel Cuevas por el -hecho nominado 99- en consecuencia **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

VI. HACER LUGAR a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera contra el punto dispositivo XX y en consecuencia





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

REVOCAR la resolución recurrida en cuanto dispuso revocar la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba que dispuso la falta de mérito de Martín Alejandro Sarmiento, César Eduardo Cappella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Paolo Srur, Eduardo Mauricio Pinto, Patricio Rolando González y Leuterio Carlos Bonetto y dispuso la suspensión de la acción penal y del cómputo de la prescripción de los delitos de lavado de activos de origen ilícito -hechos nominados 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113, respectivamente (conf. art. 303, inc. 1, del C.P.); y en consecuencia **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe el proceso según su estado atendiendo las pautas aquí delineadas.

VII. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre, sin costas en la instancia (art. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.);

VIII. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas.

El señor juez **Mariano Hernán Borinsky** dijo:

I. Que a esta Cámara Federal de Casación Penal, en su calidad de tribunal intermedio, le compete la intervención ante las resoluciones dictadas por las distintas Cámaras Federales de Apelaciones por ser el superior tribunal de la causa en la organización de la justicia federal, de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes (cfr., en lo pertinente y aplicable, C.S.J.N., "Di Nunzio", Fallos: 328:1108 y "Vidal, Matías Fernando



Cristóbal y otros s/infracción ley 24.769" -CPE 601/2016/CS1, rta. el 28/10/2021-, entre otros y de la C.F.C.P. el Acuerdo 3/2024-Plenario n° 15, "RUIZ, Roque y otro s/impugnación", rta. el 28/05/2024).

II. A los efectos de una mayor claridad expositiva, corresponde referirme en primer término a la admisibilidad formal del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra el punto dispositivo IX, por el cual el *a quo* revocó el sobreseimiento de Cristian Debarre y dispuso su procesamiento en orden al delito de asociación ilícita fiscal -hecho nominado primero-, en carácter de partícipe necesario.

En punto a ello, coincido con la solución propuesta por los colegas preopinantes, en atención a que el carácter provisorio de la calificación legal asignada impide considerar que la decisión recurrida sea de aquellas previstas en el art. 457 del CPPN, a la vez que tampoco se observa agravio de imposible o insuficiente reparación posterior.

Por este motivo, adhiero a la solución propuesta de declarar parcialmente mal concedido el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra el punto dispositivo IX de la resolución recurrida (art. 444 C.P.P.N.).

III. Seguidamente, corresponde abordar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre contra el mismo punto resolutivo (IX).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Al respecto, es menester señalar que la impugnación deducida resulta formalmente admisible en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Diez, Horacio Pedro y otro" (Fallos 344:3782), criterio reiterado en la causa FSA 24000743/2004/1/1/1/RH2, "Elicabe, Ricardo s/incidente de recurso extraordinario", rta. el 24/11/2022, y más recientemente en la causa CFP 10565/2016/5/RH1, "Juárez, Daniel Alberto s/incidente de recurso extraordinario", rta. el 22/06/2023 - (ver en similar sentido, C.F.C.P., Sala IV, causas FCR 2095/2019/1/CFC1, "Jerez, Claudio Ariel s/recurso de casación", reg. nro. 1502/22, rta. el 01/11/22; FBB 10744/2015/1/CFC1, "Zubeldía, Natalia Soledad s/recurso de casación", reg. nro. 101/2023, rta. el 23/02/23; FCB 6439/2020/CA1, "Polack, Delfín Armando y Álvarez, Miguel Alberto s/recursos de casación", reg. nro. 330/2023, rta. el 30/03/23 y CFP 6456/2020/1/CFC1, "Medina, Iván Neri s/recurso de casación", reg. nro. 1330/23, rta. el 02/10/23).

En cuanto a la cuestión de fondo, coincido en lo medular con las consideraciones efectuadas por los colegas preopinantes, doctores Javier Carbaño y Gustavo M. Hornos y emito mi voto en idéntico sentido.

En efecto, la parte recurrente sólo manifiesta su disconformidad con el temperamento asumido (procesamiento), pero sin llegar a rebatir los fundamentos que el a quo brindó para considerar acreditada -con el grado de probabilidad propio de la etapa procesal de la causa- la presunta intervención penalmente responsable del acusado en los hechos atribuidos.



En esta inteligencia, la defensa no pone en evidencia que los elementos probatorios valorados por el colegiado previo resulten insuficientes para generar el grado de conocimiento necesario sobre la presunta responsabilidad penal de Cristian Debarre (probabilidad positiva) y, llegado el caso, permitir el tránsito del proceso hacia el debate en el que la hipótesis delictiva podrá ser discutida con amplitud y sujeción a las formas sustanciales del proceso penal.

Cabe recordar que la doctrina sobre la arbitrariedad posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 295:140, 329:2206 y sus citas; 330:133, entre otros).

De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de modo reiterado que dicha doctrina no es de invocar en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos mínimos que impidan su descalificación como acto judicial (Fallos: 290:95; 325:924 y sus citas, entre otros).

En tales condiciones, las discrepancias valorativas expuestas por la parte impugnante, más allá de evidenciar la existencia de una fundamentación que no comparte, resultan insuficientes para demostrar la arbitrariedad del fallo impugnado en este punto y sólo traducen un particular punto de vista sobre el modo en que la cuestión debió ser resuelta, lo que termina de sellar la suerte del recurso intentado.

En virtud de lo expuesto, adhiero a la solución propuesta por los colegas que me preceden en cuanto corresponde





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre, sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531 in fine). Tener presente la reserva de caso federal.

IV. Sentado cuanto precede, es menester abordar el cuestionamiento del representante del Ministerio Público Fiscal al punto resolutivo VI, por el cual la cámara a quo resolvió: *"CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto declaró la incompetencia material de la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-, debiendo el Juez Federal actuante remitir los antecedentes pertinentes de la causa a la Justicia Ordinaria, para la continuación del trámite que por ley corresponda (conf. art. 172, 173 inc. 7 y 174 inc. 5, del CP y art. 33, primer párrafo inc. "e" y "c" y art. 35 del CPPN)".*

Al respecto, el señor fiscal alegó que las conductas que encuadran en los delitos referidos son claramente inescindibles de los demás ilícitos objeto de investigación -delitos tributarios y lavado de activos de origen ilícito-.

Agregó que, más allá de que en algunos casos los sujetos pasivos del delito en cuestión son "entes jurídicos sobre los que no existe intereses comprometidos en orden al patrimonio de la Nación", como señaló la Cámara, esa circunstancia no puede



valorarse de manera aislada, sino en todo el contexto de las conductas investigadas, justamente porque esos hechos no pueden ni deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria.

En esa línea, argumentó que tan estrecha es la vinculación entre las maniobras ilícitas investigadas que se impone que la justicia federal sea la que investigue todos los hechos y destacó que los delitos cuya competencia se pretende reconocer a la justicia ordinaria, no se podrían haber cometido sin el proceder delictivo de la asociación ilícita.

De la atenta lectura de las actuaciones se observa que la complejidad de las maniobras investigadas solo puede ser atendida y debidamente juzgada si se atiende al contexto en el que se desarrollaron. Por dicho motivo, y toda vez que según se desprende de la hipótesis acusatoria, las maniobras estarían estrechamente ligadas, por razones de mejor administración de justicia, corresponde que sea la justicia federal quien entienda en la investigación de los hechos objeto de recurso.

En consecuencia, adhiero a la solución propuesta de hacer lugar parcialmente al recurso fiscal, revocar el punto VI de la resolución recurrida y disponer que el Juzgado Federal de Córdoba n° 1 continúe conociendo en la investigación de los delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

V. Con relación a los agravios de las partes contra los puntos X, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII en los que se dispuso la confirmación del sobreseimiento por extinción de la acción penal respecto de los hechos 75 y 76, calificados como evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas, por aplicación de la ley 27.541; y la confirmación de la suspensión de la acción penal respecto de los hechos 77, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 90, calificados como evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas, por aplicación de la misma ley, adhiero a la solución propuesta por el colega Gustavo M. Hornos.

En efecto, la decisión adoptada por el juzgado y confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero, luce prematura. Ello así, toda vez que a los efectos de determinar la aplicación de la normativa prevista en la ley 27.541, no es posible soslayar el contexto global en el que acontecieron las maniobras investigadas.

Por ello, concuerdo con el colega preopinante en cuanto a que es necesario el desarrollo de una investigación profusa que incorpore y no deje afuera ninguna de todas las aristas que integran la compleja maniobra imputada.

Al respecto, debe destacarse que en la presente causa se investiga la existencia de una asociación ilícita fiscal y la utilización de facturas apócrifas para concretar maniobras de evasión tributaria. A ello, se agrega que se han imputado diversas maniobras de lavado de activos. Por ello, concuerdo con



el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que no se observa certeza que permita afirmar que la situación fáctica bajo estudio se ajuste a los requisitos establecidos normativamente en el régimen de regularización, para acceder a sus beneficios.

Por este motivo, corresponde revocar la resolución en cuanto dispuso la suspensión/extinción de la acción penal (según el caso) respecto de los hechos 75,76,77,78,80,81,82,85,86,90, calificados como evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas.

VI. Del mismo modo, corresponde hacer lugar a los cuestionamientos formulados por los recurrentes contra los sobreseimientos dictados por los hechos 104 y 105 -punto XIX- y contra la suspensión de la acción penal de los hechos 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113 -punto XX- calificados oportunamente como lavado de activos de origen ilícito (art. 303 del C.P.).

Al respecto, debe señalarse que en atención a la magnitud de la maniobra investigada, no puede descartarse -en el estado actual de las actuaciones- la configuración del delito de lavado de activos.

Se advierte que el tribunal a quo fundó su temperamento en que las acciones penales de los delitos precedentes -evasiones tributarias- habían sido desincriminadas. En el caso de los hechos de lavado N° 104 y 105, los imputados fueron sobreseídos por el hecho precedente -hecho N° 87- en tanto la evasión imputada no alcanzaba los nuevos montos establecidos por el Régimen Penal Tributario (ley 27.430). Y en el caso de los hechos de lavado N° 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113, las acciones





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

penales por los delitos tributarios fueron sometidas a los beneficios establecidos en el art. 10 de la ley 27.541, esto es la suspensión y/o extinción de la acción penal.

No obstante, se observa nuevamente que la decisión adoptada luce prematura. Ello obedece a variados motivos. En primer término, como he puesto de manifiesto en el punto V, es necesaria una investigación exhaustiva de la maniobra investigada a los efectos de dilucidar si resulta aplicable el régimen previsto en la ley 27.541. Como consecuencia de ello, y en atención a los fundamentos brindados por el *a quo*, **la decisión de suspender la acción penal en orden al delito de lavado de activos se presenta carente de fundamentación.**

En esa misma línea, en el caso de los sobreseimientos dictados por los hechos 104 y 105, se advierte que no se ha corroborado en autos que los activos integrados al patrimonio de los imputados hayan provenido de fuentes legales, por lo que corresponde examinar con mayor profundidad el origen de los bienes señalados por la acusación.

Particularmente, del requerimiento de instrucción formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal se observa que se han imputado tanto a Morselli como a Boero una serie de maniobras de lavado de activos por montos que superan ampliamente a aquellos vinculados con la evasión por la que fueron sobreseídos.

En este sentido, cabe recordar que según el hecho 87, los imputados habrían reducido los saldos del impuesto a ingresar



en las declaraciones juradas de IVA de MITRE S.A. por una suma de \$1.026.150,45.

Por otro lado, conforme se observa de la imputación por el hecho 104, Mario Morselli habría legitimado ilícitamente la suma aproximada de \$ 2.647.023,58, U\$S 16.300 y 105 euros. Asimismo, de lo que se desprende del hecho 105, Augusto Boero habría lavado la suma aproximada de \$ 3.166.725,22 pesos y U\$S 276.190,00.

En el escenario descripto, se advierte que los jueces de la instancia anterior no ponderaron en forma suficiente los extremos expuestos que resultan esenciales tanto para el análisis del caso como para alcanzar, razonablemente, la certeza negativa que requiere un temperamento de carácter desvinculante.

A lo expuesto se suma la complejidad y magnitud de la maniobra investigada, como así también el estado de la investigación, circunstancia que obliga a extremar los recaudos a la hora de adoptar un temperamento desincriminante.

En línea con lo expuesto, habré de recordar que este cuerpo afirmó que la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo (C.F.C.P. Sala IV, causa CFP 3017/2013/T02/86/CFC57, "Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación", reg. nro. 125/23, rta. el 28/02/23, voto del doctor Carbaño).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

A su vez, resulta admisible la prueba de indicios a fin de establecer el hecho ilícito precedente como su vinculación con el delito de lavado de activos (C.F.C.P, Sala IV, causa FRE 175/2018/TO1/CFC19. "REY, Héctor Horacio y otros s/ recursos de casación", reg. nro. 1661/23.4, rta. el 27/11/23).

Asimismo, con relación al sobreseimiento dictado respecto de Jorge Daniel Cuevas, de las circunstancias reseñadas en el voto del distinguido colega Javier Carbaño se advierte la falta de logicidad del pronunciamiento, circunstancia que conlleva inevitablemente un déficit de fundamentación que torna procedente los agravios dirigidos en su contra.

En efecto, según se desprende de la documentación digital incorporada al Sistema Lex 100 (documento agregado el 3/2/2021) Jorge Daniel Cuevas habría declarado la suma de veinte mil dólares estadounidenses, que cotizados a catorce pesos con ochenta y un centavos, determina que el sinceramiento se limitó a la suma de doscientos noventa y seis mil doscientos pesos.

De esta forma, se advierte que el análisis efectuado por el juzgado y la cámara *a quo* respecto a la capacidad económica del imputado luce desacertado. Consecuentemente, deberá profundizarse la investigación a su respecto, a fin de descartar que los bienes individualizados en el requerimiento de instrucción sean producto de un rédito económico indebido proveniente de la presunta asociación ilícita fiscal.

Debe recordarse la necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho resulta un mandato procesal esencial (CSJN, "Menéndez", Fallos: 335:1876



y CFCP, Sala IV, causas: 946/2013, "Pereyra, Mario Ariel s/recurso de casación", reg. nro. 672/14, rta. el 24/4/14; CPE 921/2012/CFC2, "Bossio Diego s/ recurso de casación", reg. nro. 1139/17, rta. el 31/8/17 y FMP 21675/2014/142/1/CFC10, "Santoro, Ciro Mario y otros s/recurso de casación", reg. nro. 1008/21, rta. el 5/07/21).

El sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. Procede cuando al tribunal no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena (cfr. en lo pertinente y aplicable, causa FCR 52019408/2013/1/CFC1, "Mieres Martín y otros s/ recurso de casación", reg. n° 1212/18.4, rta. 14/09/2018; causa FSM 66669/2014/1/CFC1, "Logística Victoria y otro s/ recurso de casación", reg. n° 1944/18.4, rta. 12/12/18; causa CFP 7216/2016/CFC1, "Katunin Alexander Yacovlevich y otros s/ recurso de casación", Reg. n° 105/19.4, rta. el 19/02/2019; causa CFP 5092/2017/5/CFC1, caratulada: "Achata Iquize, Remberto s/recurso de casación", Reg. n° 358/21.4, rta. el 6/04/21; y FMP 32005408/2008/4/1/CFC1, "Cano, Edgardo Fabián s/ recurso de casación", reg. nro. 741/22, rta. el 10/06/22; causa FGR 19263/2013/32/CFC2, caratulada: "Duarte, Pedro Laurentino y otros s/recurso de casación", Reg. n° 1166/22, rta. el 31/08/22; causa CFP 5097/2021/2/CFC1, caratulada "Rodríguez Eguavil, Melqui Manolo s/recurso de casación", Reg. n° 1357/22, rta. el 06/10/22, y causa CCC 6292/2021/CFC1 "DEDYN, Tomás y otros s/recurso de casación", Reg. 605/24.4, rta. el 05/06/24; todas de la Sala IV





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

de la CFCP, entre otras); extremos que, de momento, no se verifican en el caso.

Tampoco puede soslayarse que el art. 335 del CPPN dispone que, en caso de adquirir firmeza, el sobreseimiento "cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta", lo que reafirma la necesidad de que exista certeza para su dictado.

No corresponde, entonces, adoptar dicha solución si, tal como se verifica en el caso, está ausente "la certeza que requiere el ordenamiento procesal para sobreseer" (cfr. en lo pertinente y aplicable, causas CCC 39906/2012/4/CFC1, "D'astolfo, Norberto José s/recurso de casación", reg. n° 830/16.4, rta. 30/6/16; CFP 2161/2011/2/CFC1, "Cabeza, Eduardo Raúl y otros s/recurso de casación", reg. n° 1885/17.4, rta. 28/12/2017; FRE 2021/2014/70/CFC17, "Valles Cristián Edgardo y otros s/ recurso de casación", Reg. n° 945/18.4, rta. 8/8/2018, causa FMP 21675/2014/142/1/CFC10, "Santoro, Ciro Mario s/ recurso de casación", Reg. n° 1008/2021, rta. el 5/7/2021 y causa CCC 6292/2021/CFC1 "DEDYN, Tomás y otros s/recurso de casación", Reg. 605/24.4, rta. el 05/06/24, todas de la Sala IV de la CFCP, entre otras).

Bajo esas pautas, los argumentos exteriorizados por el tribunal en la decisión impugnada no pueden ser convalidados.

Por tales motivos, corresponde hacer lugar a los agravios presentados por las partes con relación a los puntos objeto de estudio en este apartado.



En definitiva, corresponde revocar la resolución recurrida, en cuanto dispuso el sobreseimiento de los encausados por los hechos 99, (punto XXI), 104 y 105 (punto XIX) y la suspensión de la acción penal por los hechos 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113 (punto XX), todos los cuales habían sido calificados como lavado de activos de origen ilícito (art. 303, inc. 1 del C.P.), debiéndose profundizar la investigación.

Por ello, adhiero a la solución propuesta por el distinguido colega Gustavo M. Hornos, en cuanto corresponde:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto cuestionó el punto dispositivo IX de la resolución recurrida; sin costas en la instancia (art. 530 y 531 "in fine" del C.P.P.N.).

II. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y en consecuencia **revocar el punto dispositivo VI** de la resolución recurrida y su antecedente necesario y disponer que el Juzgado Federal n° 1 de Córdoba continúe conociendo en la investigación de los delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-.

III. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra los puntos dispositivo XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, y en consecuencia **REVOCAR** la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

resolución recurrida y su antecedente necesario, en cuanto dispuso la suspensión de la acción penal con relación a Leuterio Carlos Bonetto en orden al hecho nominado 86 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Eduardo Mauricio Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento en orden a los hechos nominados 77 y 78 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Jonathan Nahuel Suarez Cavalieri en orden al hecho nominado 80 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a César Eduardo Cappella, Óscar Luque y Fernando Sciarra Villalba en orden a los hechos nominados 81 y 82 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Patricio Rolando González en orden al hecho nominado 85 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Walter Ariel Ghione y Andrés Pollano en orden al hecho nominado 90 del requerimiento de instrucción; todas presuntamente configurativos del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541); y en consecuencia **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

IV. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la querellante AFIP-DGI contra el punto dispositivo X, y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente directo en cuanto dispuso



el sobreseimiento de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas -hechos nominados 75 y 76 del requerimiento de instrucción- y **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

V. HACER LUGAR a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera contra de los puntos dispositivos XIX y XXI y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente necesario en cuanto dispuso el sobreseimiento de Mario Morselli y Augusto Boero en orden al delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 104 y 105, respectivamente (conf. art. 303 inc. 1 del CP) y de Jorge Daniel Cuevas por el -hecho nominado 99- en consecuencia **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

VI. HACER LUGAR a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera contra el punto dispositivo XX y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida en cuanto dispuso revocar la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba que dispuso la falta de mérito de Martín Alejandro Sarmiento, César Eduardo Cappella, Fernando





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

Sciarra Villalba, Leandro Paolo Srur, Eduardo Mauricio Pinto, Patricio Rolando González y Leuterio Carlos Bonetto y dispuso la suspensión de la acción penal y del cómputo de la prescripción de los delitos de lavado de activos de origen ilícito -hechos nominados 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113, respectivamente (conf. art. 303, inc. 1, del C.P.); y en consecuencia **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe el proceso según su estado atendiendo las pautas aquí delineadas.

VII. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre, sin costas en la instancia (art. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.);

VIII. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas.

En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto cuestionó el punto dispositivo IX de la resolución recurrida; sin costas en la instancia (art. 530 y 531 "in fine" del C.P.P.N.).

II. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y en consecuencia **REVOCAR el punto dispositivo VI** de la resolución recurrida y su antecedente necesario y **DISPONER** que el Juzgado Federal n° 1 de Córdoba continúe conociendo en la investigación de los delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y



defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-.

III. HACER LUGAR, por mayoría, al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra los puntos dispositivos XII, XIII, XIV, XV y XVII, y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente necesario, en cuanto dispuso la suspensión de la acción penal con relación a Eduardo Mauricio Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento en orden a los hechos nominados 77 y 78 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Jonathan Nahuel Suarez Cavalieri en orden al hecho nominado 80 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a César Eduardo Cappella, Óscar Luque y Fernando Sciarra Villalba en orden a los hechos nominados 81 y 82 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Patricio Rolando González en orden al hecho nominado 85 del requerimiento de instrucción; la suspensión de la acción penal con relación a Walter Ariel Ghione y Andrés Pollano en orden al hecho nominado 90 del requerimiento de instrucción; todas presuntamente configurativos del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541); y en consecuencia **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

IV. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra el punto dispositivo XVI, **REVOCAR** la suspensión de las acciones penales con relación a Leuterio Carlos Bonetto por los hechos 86 de los requerimientos de instrucción y **REMITIR** la causa a la instancia de origen para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

V. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la querellante AFIP-DGI contra el punto dispositivo X, y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente directo en cuanto dispuso el sobreseimiento de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas -hechos nominados 75 y 76 del requerimiento de instrucción- y **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

VI. HACER LUGAR, por mayoría, a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera contra el punto dispositivo XX y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida en cuanto dispuso revocar la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021



por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba que dispuso la falta de mérito de Martín Alejandro Sarmiento, César Eduardo Cappella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Paolo Srur, Eduardo Mauricio Pinto, Patricio Rolando González y Leuterio Carlos Bonetto y dispuso la suspensión de la acción penal y del cómputo de la prescripción de los delitos de lavado de activos de origen ilícito -hechos nominados 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113, respectivamente (conf. art. 303, inc. 1, del C.P.); y en consecuencia **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe el proceso según su estado atendiendo las pautas aquí delineadas.

VII. HACER LUGAR, por mayoría, a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera contra el punto dispositivo XIX y en consecuencia **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente necesario en cuanto dispuso el sobreseimiento de Mario Morselli y Augusto Boero en orden al delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 104 y 105, respectivamente (conf. art. 303 inc. 1 del CP) y en consecuencia **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen -a través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

VIII. HACER LUGAR a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera contra el punto dispositivos XXI y en consecuencia, **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente necesario en cuanto dispuso el sobreseimiento de Jorge Daniel Cuevas por el - hecho nominado 99- y **REMITIR** las actuaciones al juzgado de origen





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA IV
FCB 1392/2020/87/CFC3

-a través del "a quo"- para que continúe con la sustanciación del proceso conforme a las pautas aquí delineadas.

IX. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cristian Debarre, sin costas en la instancia, por mayoría (art. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.);

X. TENER PRESENTES las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial - CIJ (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.), remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.

